



**UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO**  
**FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIA POLÍTICA**  
**ESCUELA PROFESIONAL DE DERECHO**



**TESIS:**

**La reprochabilidad de la conducta del tercero interesado en el delito de tráfico de  
influencias en el derecho penal peruano**

**Autor:**

**Bach. Estela Ramos Joselito**

**Asesor:**

**Dr. Hernández Canelo Rafael**

**PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE ABOGADO**

**Fecha de sustentación:**

**04 de setiembre 2023**

**LAMBAYEQUE, 2023**

**Tesis denominada “La reprochabilidad de la conducta del tercero interesado en el delito de tráfico de influencias en el derecho penal peruano” presentada para optar el TITULO PROFESIONAL DE ABOGADO, por:**



Bach. Estela Ramos Joselito

Autor



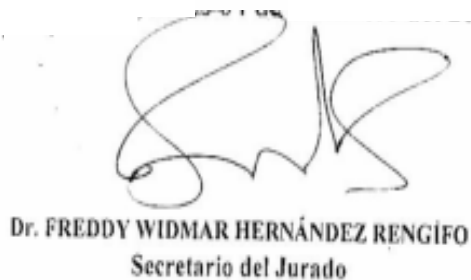
**Dr. RAFAEL HERNÁNDEZ CANELO**

Asesor

**APROBADO POR:**



Abog. CARLOS MANUEL MARTINEZ OBLITAS  
Presidente del Jurado



Dr. FREDDY WIDMAR HERNÁNDEZ RENGIFO  
Secretario del Jurado



Abog. CÉSAR VARGAS RODRIGUEZ  
Vocal del Jurado.

DR. Vargas Rodríguez Cesar

Vocal

## **DEDICATORIA**

*A Dios quien me ayuda, me sustenta y me guía.*

*A mis padres Augusto Joselito y Emma Elita, quienes en todo momento me apoyaron.*

*A mis Hermanos Franklin, Sandro, Elena y Vanesa, los cuales son una parte muy importante en mi vida.*

## **AGRADECIMIENTO**

*A Dios quien envió a Jesucristo, quien es mi sacrificio, mi propiciación, mi redentor y mi remisión.*

*A Dios quien es mi Señor.*

*Al Dr. Hernández Canelo Rafael, Asesor de la tesis por su apoyo y cooperación, en la realización del presente trabajo de investigación.*

*A todos los maestros de la facultad de derecho y ciencia política, de nuestra muy excelentísima alma mater, la muy prestigiosa “Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo”, por sus enseñanzas y orientación no solo en lo académico, también en lo moral que en todo momento me brindaron.*



**UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO**  
**FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIA POLITICA**  
UNIDAD DE INVESTIGACION



**ACTA DE SUSTENTACIÓN**

**A C T A DE SUSTENTACIÓN PRESENCIAL N° 42-2023-UI-FDCP**

Sustentación para optar el Título de ABOGADO de: **Joselito Estela Ramos**.

Siendo las 11:00 a.m. del día lunes 04 de setiembre del 2023 se reunieron en la Sala de sustentaciones de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional "Pedro Ruiz Gallo", los miembros del jurado evaluador de la tesis titulada: "**LA REPROCHABILIDAD DE LA CONDUCTA DEL TERCERO INTERESADO EN EL DELITO DE TRÁFICO DE INFLUENCIAS EN EL DERECHO PENAL PERUANO**", designados por Resolución N° 338-2022-FDCP-VIRTUAL de fecha 30 de noviembre del 2022, con la finalidad Evaluar y Calificar la sustentación de la tesis antes mencionada, por parte de los Señores Catedráticos:

**PRESIDENTE** : Abog. CARLOS MANUEL MARTINEZ OBLITAS.  
**SECRETARIO** : Dr. FREDDY WIDMAR HERNÁNDEZ RENGIFO.  
**VOCAL** : Abog. CESAR VARGAS RODRIGUEZ

La tesis fue asesorada por Dr. RAFAEL HERNÁNDEZ CANELO, nombrada por Resolución N°338-2022-FDCP-VIRTUAL de fecha 30 de noviembre del 2022.


El acto de sustentación fue autorizado por Resolución N° de fecha .


La tesis fue presentada y sustentada por el bachiller **Joselito Estela Ramos** y tuvo una duración de 30 minutos. Después de la sustentación y absueltas las preguntas y observaciones de los miembros del jurado; se procedió a la calificación respectiva, obteniendo el siguiente resultado: **APROBADO con la nota de 17 ( DIECISIETE ) en la escala vigesimal, mención de BUENO**.

Por lo que queda APTO para obtener el Título Profesional de ABOGADO, de acuerdo con la Ley Universitaria 30220 y la normatividad vigente de la Facultad de Derecho y Ciencia Política, y la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo.

Siendo las : .m., del mismo día, se da por concluido el acto académico tomando la juramentación respectiva y suscribiendo el Acta los miembros del jurado.

Lambayeque, lunes 04 de setiembre del 2023

  
Abog. CARLOS MANUEL MARTINEZ OBLITAS  
Presidente del Jurado

  
Dr. FREDDY WIDMAR HERNÁNDEZ RENGIFO  
Secretario del Jurado

  
Abog. CESAR VARGAS RODRIGUEZ  
Vocal del Jurado.

***Certificación:*** El Director de la Unidad de Investigación de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, certifica la veracidad del contenido del Acta de sustentación de tesis Virtual N° 42-2023-UI-FDCP correspondiente a **Joselito Estela Ramos**, evento que se ha realizado de manera presencial el día lunes 04 de setiembre del 2023 y aparece registrada en el archivo correspondiente.

Lambayeque, 06 de setiembre del 2023

UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO  
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIA POLITICA



Dr. Rafael Hernández Canelo  
Director De La Unidad De Investigación

## CONSTANCIA DE APROBACIÓN DE ORIGINALIDAD DE TESIS

Yo, Dr. RAFAEL HERNÁNDEZ CANELO, Docente/ Asesor de tesis/ Revisor del trabajo de investigación del bachiller en DERECHO Joselito Estela Ramos, Titulada LA REPROCHABILIDAD DE LA CONDUCTA DEL TERCERO INTERESADO EN EL DELITO DE TRÁFICO DE INFLUENCIAS EN EL DERECHO PENAL PERUANO, luego de la revisión exhaustiva del documento constato que la misma tiene un índice de similitud de 19% verificable en el reporte de similitud del programa Turnitin.

El suscrito analizó dicho reporte y concluyó que cada una de las coincidencias detectadas no constituyen plagio. A mi leal saber y entender la tesis cumple con todas las normas para el uso de citas y referencias establecidas por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo.

Lambayeque, 19 de junio del 2023



---

**Dr. RAFAEL HERNÁNDEZ CANELO**  
**D.N.I.16465401**  
**ASESOR**



---

Bach. Joselito Estela Ramos

DNI: 48833633

Autor

# La reprochabilidad de la conducta del tercero interesado en el delito de tráfico de influencias en el derecho penal peruano

## INFORME DE ORIGINALIDAD

19%

INDICE DE SIMILITUD

17%

FUENTES DE INTERNET

6%

PUBLICACIONES

11%

TRABAJOS DEL  
ESTUDIANTE

## FUENTES PRIMARIAS

1	Submitted to Universidad Señor de Sipan	4%
	Trabajo del estudiante	
2	hdl.handle.net	4%
	Fuente de Internet	
3	repositorio.ucv.edu.pe	2%
	Fuente de Internet	
4	Submitted to Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo	2%
	Trabajo del estudiante	
5	www.repositorioacademico.usmp.edu.pe	1%
	Fuente de Internet	
6	qdoc.tips	1%
	Fuente de Internet	
7	idoc.pub	1%
	Fuente de Internet	
8	repositorio.unprg.edu.pe	<1%
	Fuente de Internet	



Dr. RAFAEL HERNÁNDEZ CANELO

D.N.I.16465401

ASESOR

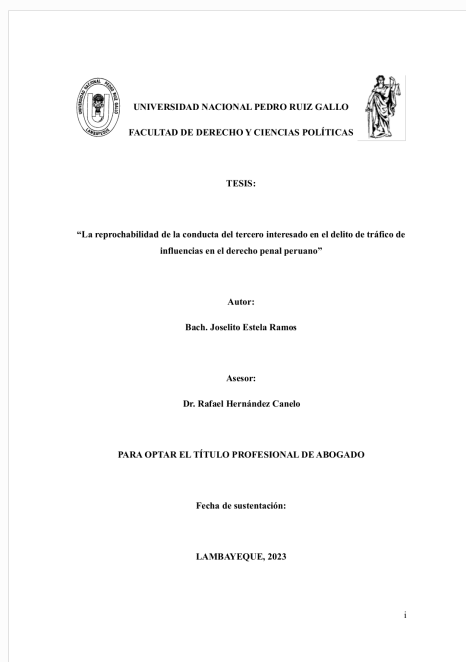


## Recibo digital

Este recibo confirma que su trabajo ha sido recibido por Turnitin. A continuación podrá ver la información del recibo con respecto a su entrega.

La primera página de tus entregas se muestra abajo.

Autor de la entrega: Joselito Estela Ramos  
Título del ejercicio: REVISIÓN DE TESIS  
Título de la entrega: La reprochabilidad de la conducta del tercero interesado en...  
Nombre del archivo: INFORME\_FINAL\_DE\_TESIS\_COMPLETA\_-\_ESTELA\_RAMOS\_JOS...  
Tamaño del archivo: 128.83K  
Total páginas: 86  
Total de palabras: 22,442  
Total de caracteres: 121,414  
Fecha de entrega: 19-jun.-2023 01:35p. m. (UTC-0500)  
Identificador de la entrega: 2119203802



Derechos de autor 2023 Turnitin. Todos los derechos reservados.

**Dr. RAFAEL HERNÁNDEZ CANELO**  
**D.N.I.16465401**  
**ASESOR**



## ÍNDICE

DEDICATORIA.....	iii
AGRADECIMIENTO.....	iv
RESUMEN.....	x
ABSTRACT .....	xi
INTRODUCCION .....	12
CAPITULO I: ASPECTOS METOLOGICOS.....	16
1.2.    Formulación del problema. ....	18
1.3.    Justificación e importancia del estudio.....	18
1.3.1.    Justificación del estudio. ....	18
1.3.2.    Importancia del estudio. ....	19
1.4.    Objetivos.....	19
1.4.1.    Objetivo General. ....	19
1.4.2.    Objetivos Específicos. ....	19
1.5.    Hipótesis. ....	20
1.6.    Categorías. ....	20
1.6.1.    Variable independiente: ....	20
1.6.2.    Variable dependiente: ....	20
1.7.    Métodos .....	21
1.7.1.    Métodos generales.....	21
1.7.2.    Técnicas.....	21

1.7.2.1. El fichaje .....	21
1.7.2.2. La entrevista,.....	22
1.8. Instrumentos.....	22
CAPITULO II: MARCO CONCEPTUAL .....	23
PARTE I: ANTECEDENTES HISTÓRICOS .....	23
I. Antecedentes Nacionales .....	23
1.9. Antecedentes internacionales .....	25
PARTE II: DEFINICIONES CONCEPTUALES .....	27
2.1. Tráfico de influencias .....	27
2.2. Vendedor de influencias.....	27
2.3. Tercero interesado .....	27
2.4. Influencia .....	28
2.5. Influencia simulada .....	28
2.6. Sujeto pasivo:.....	28
2.7. Medio Corruptor: .....	28
PARTE III: APROXIMACIÓN DOCTRINARIA DE LA REGULACION EN EL PERU.....	29
3.1. El delito de tráfico de influencias, relevancia y construcción típica en la Regulación Nacional .....	29
3.1.1. En cuanto al bien jurídico a tutelar .....	30
3.1.2. Estructura Típica del Tráfico de Influencias.....	32
3.1.3. La consumación del ilícito.....	33

3.2. El tercer interesado y la reprochabilidad de su conducta .....	34
3.2.1. Corte Suprema y su postura en el Plenario n.º 003 – 2015 .....	34
3.2.2. La crítica en la doctrina .....	35
3.3. INTERVENCION DELICTIVA .....	37
3.3.1. Autoría y participación regulado en el código penal peruano .....	37
3.4. CASO RELEVANTE .....	42
3.4.1. Caso Vladimiro montesino .....	42
3.4.1.1. Exposición de los hechos:.....	42
PARTE IV: TRATAMIENTO COMPARADO .....	44
4.1. La experiencia colombiana .....	44
4.2. El tratamiento español .....	45
4.3. En la legislación Argentina .....	46
4.4. La regulación Uruguay .....	47
CAPITULO III: ANÁLISIS DE RESULTADOS .....	49
I. INFORMACIÓN DEMOGRÁFICA .....	49
5. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN.....	50
CAPITULO IV: CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS .....	66
I. DISCUSIÓN DE RESULTADOS .....	66
6. PROPUESTA MODIFICATORIAE DEL ART. 400 DEL CODIGO PENAL PERUANO .....	74
6.1. Exposición de motivos .....	74

6.2. Fórmula legal .....	78
6.3. Análisis costo beneficio .....	79
CONCLUSIONES .....	80
RECOMENDACIONES .....	82
BIBLIOGRAFÍA .....	83
LINKOGRAFIA .....	86

## ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Relación de jueces, fiscales y abogados entrevistados. ....	49
Tabla 2. Respuesta a la interrogante N° 1 de la entrevista realizada. ....	50
Tabla 3. Respuesta a la interrogante N° 2 de la entrevista realizada. ....	52
Tabla 4. Respuesta a la interrogante N° 3 de la entrevista realizada. ....	53
Tabla 5. Respuesta a la interrogante N° 4 de la entrevista realizada. ....	54
Tabla 6. Respuesta a la interrogante N° 5 de la entrevista realizada. ....	56
Tabla 7. Respuesta a la interrogante N° 6 de la entrevista realizada. ....	57
Tabla 8. Respuesta a la interrogante N° 7 de la entrevista realizada. ....	58
Tabla 9. Respuesta a la interrogante N° 8 de la entrevista realizada. ....	59
Tabla 10. Respuesta a la interrogante N° 9 de la entrevista realizada. ....	59
Tabla 11. Respuesta a la interrogante N° 10 de la entrevista realizada.....	60
Tabla 12. Respuesta a la interrogante N° 11 de la entrevista realizada.....	62
Tabla 13. Respuesta a la interrogante N° 12 de la entrevista realizada. ....	63
Tabla 14. Respuesta a la interrogante N° 13 de la entrevista realizada. ....	64
Tabla 15. Respuesta a la interrogante N° 14 de la entrevista realizada. ....	64

## RESUMEN

Es muy Controversial el tratamiento que debe recibir la actuación del tercero interesado en el delito de “Tráfico de Influencias” dentro del ordenamiento jurídico Penal Peruano, la Corte Suprema ha intentado cerrar dicha discusión a través del Acuerdo Plenario n.º 003-2015 en el que determina que el título de imputación bajo el cual deberá responder es el de instigación, no obstante, tal posición ha sido objeto de una serie de críticas en la doctrina en relación a que señalan la posibilidad de que la conducta del tercer interesado calce bajo ciertos supuestos en la de un cómplice primario, adicional a ello, aunque no de forma expresa, el plenario mencionada deja entrever la existencia de un vacío legal que abre una brecha de impunidad para este delito, por lo que en la presente investigación se ha pretendido por medio de un análisis descriptivo propositivo, analizar legal, jurisprudencial y doctrinariamente los supuestos que rodean la conducta del tercero interesado en el delito de tráfico de influencias con la finalidad de contribuir con el esclarecimiento del título de imputación adecuado bajo el cual debe responder, concluyendo que debe partirse de que fundamento jurídico para atribuir responsabilidad penal al tercero interesado en el delito de tráfico de influencias, es la contribución a la conducta del autor, proponiéndose para ello una modificación al artículo 400 del Código Penal, la cual será una implementación de un párrafo respecto a la sanción penal que debe recaer sobre la persona que se beneficiara con el resultado final de la venta de influencias, así mismo los verbos rectores que regularan la conducta de la misma.

Palabras Claves: Tercer interesado, tráfico de influencias, instigación, complicidad primaria, título de imputación, participación delictiva.

## **ABSTRACT**

Controversial is the reproach that must receive the conduct of the third party interested in the crime of influence peddling in Peruvian criminal law, the Supreme Court has tried to close the discussion through Plenary Agreement No. 003-2015 in which it determines that the title of imputation under which he must respond is that of incitement, however, this position has been the object of a series of criticisms in the doctrine in relation to the fact that they indicate the possibility that the conduct of the third party may fit under certain assumptions in that of a primary accomplice, in addition to this, although not expressly, the aforementioned plenary hints at the existence of a legal vacuum that opens a gap of impunity for this crime, for which in the present investigation it has been sought through an analysis purposeful descriptive, legally, jurisprudentially and doctrinally analyze the assumptions surrounding the conduct of the third party interested in the crime of influence peddling in order to contribute to the determination of the appropriate title of imputation under which he must respond, concluding that it must be assumed that The legal basis for attributing criminal responsibility to the third party interested in the crime of influence peddling is the contribution to the author's conduct, proposing a modification to article 400 of the Penal Code.

Keywords: Third party, influence peddling, instigation, primary complicity, title of imputation, criminal participation.

## INTRODUCCION

La corrupción no es ajena a nuestra realidad, la misma se ha mantenido en el pasar del tiempo; tomando como referencia a partir desde nuestra independencia(1821); el escritor Jacqueline fowks, escribió en el diario “EL PAIS” el 19/04/2019, que “las riquezas que nuestro país tuvo como tesoros públicos a partir de la Independencia, fueron total mente saqueadas por sus propios gobernantes, citando como referencia, el libro HISTORIA DE LA CORRUPCIÓN, redactado por el historiador nacional Alfonso Walter Quiroz Norris, publicado en el 2013, en el cual precisa que, durante los 200 años de independencia solo AGUSTO LEGIA, fue encarcelado, el mismo que dejo de existir en 1832, pasando sus últimos días de vida en la cárcel de nuestra capital”.

Remontando a nuestra actualidad, en el penal de barbadillo se encuentra recluido el ex presidente ALBERTO FUJIMORI, el ex presidente PEDRO CASTILLO, el cual está siendo investigado por formar parte de una red criminal, las cuales se dedicaban traficar influencias y al delito de colusión, y el hoy también recluido ALEJANDRO TOLEDO ex presidente del Perú, el cual es investigado por la comisión de delitos con la administración pública, siendo una de ellos el delito de “ TRAFICO DE INFLUENCIAS”, tres presidentes recluidos en un mismo penal, de ello se corrobora que hasta la actualidad los que gobernaron nuestro país estuvieron inmersos en el mundo oscuro de la corrupción.

En esta etapa de nuestra historia, el “tráfico de las influencias”, es el centro de atención, esto es por la diversidad de noticias e investigaciones de la corrupción de los altos funcionarios y no solo en el gobierno central, inclusive en los gobiernos regionales, provinciales, distritales y locales, por lo cual en nuestra legislación esta conducta no era relevante penalmente, hasta la entrada en vigencia del CP de 1924 y la implementación sobre la tipificación de la misma mediante el DL. N° 121, 12/06/1981, sus antecedentes fueron la legislación penal de 1980 de nuestro país hermano Colombia e hispana en el CP 1973, hasta el actual tratamiento en el CP vigente de 1991, en el art. 400, por lo cual, es necesario realizar un analisis minucioso respecto al componente teórico-dogmático de este delito, así mismo el carácter antijurídico de las conductas de cada uno de los intervinientes que permite sancionarlos penalmente por no haber actuado diferente teniendo la posibilidad de hacerlo, a efectos de verificar el correcto tratamiento al que deban someterse los mismos.



Citando el art.400 de nuestro Código Penal, en el cual se tipifica lo concerniente al delito líneas anteriores mencionado, siendo su texto penal:

“El que, teniendo o invocando influencias, reales o simuladas, recibe, hace dar o prometer para sí o para un tercero, donativo o promesa o cualquier otra ventaja con el ofrecimiento de interceder ante un funcionario o servidor público que ha de conocer, esté conociendo o haya conocido, un caso judicial o administrativo, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de seis años”.

Como se puede apreciar de la reacción típica del artículo 400 CP, hoy el legislador, ha prestado especial interés en la conducta del que trafica las influencias, dejando de lado la conducta del influenciado en este caso la autoridad o funcionario a cargo de resolver un asunto judicial o administrativo, en tanto por obvias consideraciones tal autoridad o funcionario responderá por un delito especial independiente del delito del tráfico de influencias; no obstante, la redacción típica presentada también ha dejado de lado la figura del tercero el cual es el beneficiario de la intervención de la autoridad en caso judicial o administrativo del cual tiene conocimiento y cuál será la responsabilidad y su conducta dentro de la comisión del delito.

Ante ello, es la Corte Suprema quien por medio de la jurisprudencia y el Acuerdo Plenario n.º 03- 2015 al tratar de responder a la interrogante de cuál sería la responsabilidad justamente la conducta del tercero interesado en el delito de tráfico de influencias decantándose por señalar que dicha conducta no cumple con los estándares de la complicidad criminal, debiéndose por lo tanto reprochar bajo la figura de instigación en tanto a su entender, es el tercero interesado quien hace nacer en el vendedor de influencias la voluntad de cometer el ilícito e interceder en su favor frente a una autoridad o funcionario; adicional a esto también se ha señalado que en aquellos supuestos en los que el tercer interesado se limite a aceptar las influencias, reales o ficticias, que propone el vendedor o traficante de influencias, su conducta devendrá en impune no debiendo ser reprochada penalmente.

Este pronunciamiento ha sido objeto hoy de una serie de críticas por parte de la doctrina y la academia en tanto, entienden que la construcción típica del artículo 400 del código

penal, no está pensada para supuestos en los que sí el tercer interesado quien solicite las influencias del vendedor, sino por el contrario y como la práctica lo demuestra existen personas dedicadas de forma exclusiva a la venta y el tráfico de influencias circunstancia hoy en la que sería discutible el título de “instigador” para el tercero interesado, en tanto, este no estaría creando voluntad alguna en el vendedor de influencias para cometer el ilícito.

Por otra parte, hay quienes sostienen, que el vacío legal existente en la construcción típica del delito de tráfico de influencias en el Código Penal Peruano y la imprecisión del acuerdo plenario antes mencionado hoy estarían generando espacios de sobre punibilidad y excesiva impunidad en determinados casos; es justamente partiendo de tal lógica que la presente investigación pretende contribuir en la correcta determinación del título de imputación bajo el cual debería responder el tercero interesado.

Para ello, se planteó como pregunta de investigación determinar: ¿Cuál es el título de imputación bajo el cual se deberá reprocharse la conducta del tercero interesado en el delito de tráfico de influencias en el derecho penal peruano? Y se adoptó la hipótesis de que, atendiendo a lo regulado en el tipo y las reglas de la participación que se encuentra en la parte general siendo específicos en los art. 24 y 25 CP, el fundamento jurídico los cuales sirven en la determinación de la responsabilidad penal al tercero interesado en el tráfico de influencias, es la contribución a la conducta del autor. Planteándose para ello una investigación de tipo básica y de corte inductivo deductivo.

Así, en el primer capítulo abordará, lo concerniente al aspecto metodológico de la presente investigación consistentes en la descripción de la realidad problemática a estudiarse, el planteamiento de la pregunta de investigación y los objetivos de la misma, la determinación de la hipótesis, así como la presentación de las categorías de estudio, los métodos utilizados, las técnicas e instrumentos de investigación.

Un segundo capítulo presentará el marco conceptual de la investigación conteniendo en un primer momento los antecedentes históricos de la misma, posteriormente las bases teóricas que sustentan la investigación para culminar con una breve descripción de la experiencia comparada en relación a nuestra investigación.

El tercer capítulo de la presente investigación hoy presentará los resultados a los que se han arribado en la presente investigación como consecuencia del análisis jurisprudencial doctrinario y de la experiencia comparada realizada, así como de los resultados obtenidos de la aplicación de los instrumentos de investigación.

El cuarto capítulo presentará la contratación de hipótesis mediante el método de la triangulación de datos en función a los antecedentes históricos, las bases teóricas de la investigación y los resultados de la misma a efectos de determinar en el presente caso cuál es el correcto hoy factor de atribución bajo el cual deberá reprocharse o no la conducta del tercero interesado en lo concerniente al de tráfico de las influencias.

Finalmente, se presentarán las conclusiones y recomendaciones a las que se arribó en la presente investigación efectos de contribuir a la práctica de diario del derecho penal y al abordaje del delito de tráfico de influencias, así como la responsabilidad de la conducta del tercer interesado en tal ilícito.

## **CAPITULO I: ASPECTOS METOLOGICOS**

### **I. ASPECTOS METOLOGICOS**

#### **1. REALIDAD PROBLEMÁTICA**

##### **1.1.Planteamiento del problema.**

Hablar de corrupción en el Perú no es hablar de un concepto nuevo, por el contrario, es hablar de un término arraigado en la historia misma de nuestra vida republicana y contemporánea; un fenómeno entendido como el aprovechamiento indebido del poder público para lograr beneficios personales o particulares trayendo como consecuencia un atraso social y rechazo de la población hacia los sistemas de gobierno y las autoridades que los representan.

Este fenómeno sin duda alguna se ha ido arraigando con fuerza en nuestro país tal es así que los presidentes de los últimos 35 años en el Perú se encuentran inmersos en investigaciones por actos de corrupción o bien ya han sido procesados y condenados por dichos delitos, tal es así que la corrupción está presente en las principales instituciones que componen nuestro ordenamiento jurídico y en las más altas esferas del poder como lo pudimos apreciar con el famoso estallido de los audios de la vergüenza en el caso los cuellos blancos del puerto en los que el pueblo peruano pudo apreciar con desdén como los más altos magistrados del poder judicial negociaban favores beneficios e incluso absoluciones penales sin el menor escrúpulo posible ante ello.

Ante estos hechos la respuesta estatal punitiva por parte del estado peruano se ha centrado en la regulación de cada vez más conductas como hechos delictivos, la agudización de las penas o la reducción de beneficios procesales en dichos delitos buscando con ello reducir al mínimo los espacios de impunidad teniendo como base fuerte y de sustento el rechazo social a los actos de corrupción que se presentan en nuestro país y lo negativo que ello supone para el desarrollo social.

No obstante, pese a las correctas intenciones del estado peruano en dicha regulación los resultados que han devenido en las mismas no siempre han sido positivos una muestra de ello es la regulación del tipo penal del tráfico de influencias contenido en el artículo 400 del código penal y sobre cuyo análisis versará la presente investigación. En este caso específico coma si bien el estado peruano ha cumplido con regular la reprocha habilidad penal de la conducta para aquella persona que invoca tener una influencia o capacidad de ingerir sobre una autoridad judicial o administrativa, aun cuando dicha influencia sea mera simulación, no ha contemplado en el tipo penal cuál sería el tratamiento que debe dársele al tercero interesado con dichas influencias bien sea que las haya solicitado o simplemente acceda al ofrecimiento de las mismas; generando con ello vacíos interpretativos que pueden devenir en impunidades o incorrectas tipificaciones jurídicas.

“Diversas son las interpretaciones que han surgido en función a cuál sería la reprochabilidad que debería presentar la conducta del tercero interesado en el delito de tráfico de influencias, tal es así que la Corte Suprema de la República a través del Acuerdo Plenario n.º 03-2015 ha tratado de buscar una respuesta señalando que dicha conducta debería ser reprochada bajo el supuesto de instigación en el caso que la conducta del tercero interesado haga nacer en el sujeto activo, esto es el vendedor de influencias, la convicción de cometer y será inimputable cuando el tercer interesado se limite simplemente a aceptar la oferta recibida por el vendedor de influencias en tanto su conducta no podrá ser reprochada a título de cómplice pues no se cumplirían con las reglas de la participación delictiva”.

Dicha postura no ha sido recibida de forma positiva en la doctrina presentándose posturas contradictorias existiendo en algunos casos autores que se inclinan por considerar la conducta del tercero interesado como subsumible bajo el título de imputación de la participación criminal y hay quienes señalan que en ninguno de los

casos se puede reprochar la conducta del tercero interesado por cuánto su participación no se da en la fase previa del tipo penal sino en la etapa de ejecución del mismo, y ya que se limita a la simple aceptación de la influencia que se le está proponiendo debería considerarse le cómo impune.

Como podemos apreciar ni la doctrina ni la jurisprudencia ha logrado resolver la interrogante derivada de una incorrecta técnica legislativa al momento de regular el delito de tráfico de influencias generando vacíos interpretativos en relación a la responsabilidad que tendría la conducta del tercero interesado por lo que la presente investigación tratará de contribuir a determinar justamente si la conducta del tercer interesado posee o no relevancia penal y de serlo así cuál sería el título de imputación bajo el cual debería responder a efectos de proponer una regulación específica y precisa que permita suplir los problemas advertidos.

## **1.2. Formulación del problema.**

¿Cuál es el título de imputación bajo el cual se deberá reprocharse la conducta del tercero interesado en el delito de tráfico de influencias en el derecho penal peruano?

## **1.3. Justificación e importancia del estudio.**

### **1.3.1. Justificación del estudio.**

La justificación teórica de la presente investigación radica en el análisis doctrinario y jurisprudencial de la figura del tercero interesado en el delito de tráfico de influencias, así como la reprochabilidad que supone su conducta en el ordenamiento jurídico peruano a efectos de verificar regulaciones efectivas que permitan identificar su correcto tratamiento y a su vez evitar la presencia de supuestos de impunidad o sobre criminalización.

La justificación práctica de la presente investigación, radica en que una vez determinado el título de imputación bajo el cual debe ser reprochada o no la participación del tercero interesado, esto se pondrá en práctica en los procesos penales que versen sobre dicho delito, posibilitando una mejor aplicación de justicia y satisfaciendo las expectativas de la población.

La justificación metodológica de la presente investigación, radica en analizar el problema planteado desde una perspectiva cualitativa, mediante el análisis de casos y la percepción de expertos en derecho penal que nos permitan contrastar los supuestos teóricos con la realidad de nuestro sistema de administración de justicia y en base a ello plantear los lineamientos con los que consideramos se deberá tratar “la conducta del tercero interesado”.

### **1.3.2. Importancia del estudio.**

En la presente investigación se busca contribuir al desarrollo del debate surgido en nuestro sistema penal en relación a la reprochabilidad que debe recibir la conducta de los terceros interesados en el delito de tráfico de influencias, en tanto la casuística de este delito viene en crecimiento, mientras que la respuesta estatal esbozada en el Acuerdo Plenario n.º 03-2015/CIJ-116 viene siendo objeto de múltiples críticas, por lo que es imperante buscar una respuesta efectiva que evite la presencia de supuestos de impunidad o sobre criminalización.

## **1.4.Objetivos.**

### **1.4.1. Objetivo General.**

Determinar el título de imputación bajo el cual se deberá reprochar la conducta del tercero interesado en el delito de tráfico de influencias en el derecho penal peruano.

### **1.4.2. Objetivos Específicos.**

Analizar la configuración típica del artículo 400 del Código Penal a efectos de verificar la realidad normativa de la reprochabilidad de la conducta del tercero interesado en el delito de tráfico de influencias.

Verificar el tratamiento del tercero interesado en la jurisprudencia y doctrina nacional y extranjera en el delito de tráfico de influencias.

Verificar la percepción de los operadores jurídicos de la región en relación al tratamiento que se le debe dar a la conducta del tercero interesado en el delito de tráfico de influencias.

Proponer una reforma que brinde un correcto tratamiento a la conducta del tercero interesado en el delito de tráfico de influencias, a efectos de evitar supuestos de impunidad o sobre criminalización.

### **1.5.Hipótesis.**

Siguiendo los lineamientos en la configuración del tipo y las reglas de la participación, el fundamento jurídico para atribuir responsabilidad penal al tercero interesado en el delito de tráfico de influencias, es la contribución a la conducta del autor.

### **1.6. Categorías.**

#### **1.6.1. Variable independiente:**

La participación del tercero interesado en la comisión del delito de tráfico de influencias y la relevancia penal de su conducta.

#### **1.6.2. Variable dependiente:**

El título de imputación bajo el cual deberá responder el tercero interesado en el delito de tráfico de influencias.



## **1.7.Métodos**

### **1.7.1. Métodos generales.**

La presente investigación, va a presentar un método inductivo deductivo, que se va a centrar en un principio en determinar en base al fenómeno observado y la realidad problemática analizada, su naturaleza y fenomenología, la cual será tomada como punto de partida para la construcción de nuevos enunciados científicos que puedan ser aplicados a situaciones similares, o para dar respuesta a nuevos problemas, en un determinado contexto.

Asimismo, se utilizará el método sistemático, a efectos de verificar que la normativa que se encuentre buscando una solución al problema central de la presente investigación, no constituya solamente un mandato imperativo aislado de la realidad, sino que de forma conjunta con las acciones desplegadas por nuestro gobierno y reguladas en nuestro ordenamiento jurídico, a efectos de verificar la reprochabilidad o no de la conducta del tercero interesado en el delito de tráfico de influencias.

### **1.7.2. Técnicas.**

Como técnica en esta investigación, fue la recolección de datos, la cual fue de vital importación, debido que por medio de ella, se logró reunir y ordenar la información necesaria para llegar al objetivo trazado, esta técnica tiene en su misma diferentes o mejor dicho diversidad de instrumentos, y por ende en esta investigación se han optado por:

**1.7.2.1.**El fichaje, a efectos de poder realizar un correcto análisis documental y jurisprudencial de la información obtenida, en libros, revistas de derecho, piezas de jurisprudencia que nos permitan tener una mejor luz del tratamiento que le da la práctica jurídica a “La conducta del tercero interesado en el delito de tráfico de influencias”.

**1.7.2.2.**La entrevista, aplicada a magistrados, fiscales y abogados especialistas en derecho penal de la región, a efectos de poder obtener sus perspectivas en base a la experiencia en investigaciones y procesos penales sobre tráfico de influencias, a efectos de determinar cuál es el tratamiento que debe recibir la conducta de estos sujetos.

## **1.8.Instrumentos.**

Fichas, mediante la cual se compilara o reunirá la información trascendental devenida de las fuentes de investigación con la finalidad de conocer el tratamiento que recibe en la doctrina y la jurisprudencia la conducta del tercero interesado en el tráfico de las influencias.

Guía de entrevistas, a efectos de poder conocer la percepción de los operadores jurídicos en base a su experiencia del tratamiento procesal y la práctica diaria del derecho que se le viene dando a nuestra realidad problemática y cuál sería la reprochabilidad de la conducta de la persona que acude o acepta la oferta en el tráfico de influencias.

Para ello, se deberá proceder a la elaboración de las preguntas que van a conformar la entrevista, debiendo tener en cuenta las categorías de la investigación que se pretenden medir, elaborando para ello interrogantes que presenten respuestas abiertas, en función a las cuales se construirá la propuesta final de la investigación.

## **CAPITULO II: MARCO CONCEPTUAL**

### **PARTE I: ANTECEDENTES HISTÓRICOS**

#### **I. Antecedentes Nacionales**

Mori, (2022) en su tesis de maestría ante la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, analiza al tercero interesado en “ tráfico de influencias”, en donde se plantea como objetivo principal demostrar que el “tercero interesado” en el delito de “tráfico de influencias”, en su calidad de partícipe necesario, responde a título de instigador y/o cómplice, situación que analizó mediante métodos dogmáticos llegando a concluir que el “tercero interesado” realiza una contribución que se subsume en la norma penal, es decir, que el mismo ante la invocación de influencias que realiza el traficante acepta y le otorga o promete una contraprestación, por lo cual se atribuye una responsabilidad penal con el título de partícipe bajo la modalidad de “cómplice” en el delito “tráfico de influencias” a título de cómplice primario. Aunado se puede presentar el caso, en el que ejerce un influjo psicológico sobre “un tercero o funcionario público” por el cual determina, la invocación de influencias recibiendo por las mismas una retribución, su título en el ilícito penal se instigador.

Huamán, (2021) en su trabajo de segunda especialidad ante la Pontificia Universidad Católica del Perú, analiza el rol del tercero interesado en el delito de tráfico de influencias en el ordenamiento jurídico peruano, llegando a la conclusión de que la participación del tercero interesado en la invocación de influencias puede ser calificada como participación a título de instigador o de cómplice primario, identificando además que la ratio del delito de tráfico de influencias se encuentra no solo en la literalidad del tipo, en el que los verbos rectores únicamente describen conductas atribuibles al autor.

Quino, (2021) en su tesis de maestría ante la Universidad César Vallejo, analiza la falta de regulación dentro del tipo penal expresa del tercero interesado en el Art.400 CP y la repercusión en su ejecución, analizándolo desde una perspectiva básica, descriptiva-interpretativa, llegando a la conclusión que al no encontrarse, una regulación respecto a la sanción penal que debe imponerse

al “Tercero Interesado”, en el ART.400 del CP, Vigente en la actualidad, traen como consecuencia que estas conductas sean repetitivas, siendo totalmente reprochables y más aún perjudiciales, para la administración pública, siendo este el bien jurídico que la norma penal protege, y estas conductas generan en la población una percepción errónea de la justicia peruana, por lo cual expresa que es necesario debido a la coyuntura actual, se especifique la sanción penal expresamente del “Tercero Interesado”, con la finalidad de prevenir alguna intervención maliciosa dentro del administración de justicia, además contribuir en nuestro país a combatir la corrupción.

Gallardo, (2020) en su tesis doctoral, denominada “Participación del interesado en la responsabilidad penal del delito de tráfico de influencias en el ordenamiento jurídico peruano” ante la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, concluye que la conducta del tercero interesado, no puede ser considerada como impune, en tanto sin su participación no sería posible la realización del ilícito, por lo que debería responder como cómplice primario, cuestionando la determinación sobre el autor de la conducta relevante penalmente, expresando que para atribuir el título de instigador no es suficiente el influjo psicológico en el autor, por lo cual se debe realizar modificaciones legislativas con el objetivo de poder evitar los vacíos legales los cuales generar una impunidad.

Díaz, (2020) en su tesis de maestría ante la Universidad César Vallejo, analiza “La responsabilidad penal del tercero interesado en el delito de Tráfico de Influencias regulado en el artículo 400° del Código Penal”, planteándose como “objetivo principal determinar si se debería sancionar penalmente la conducta del tercero interesado en el delito de Tráfico de Influencias previsto en el Artículo 400° del Código Penal”, problemática que se analizó desde una perspectiva básica descriptiva mediante análisis documental, llegando a la conclusión, que la participación del “Tercero Interesado”, se subsume dentro de los criterios de complicidad o instigación, por lo cual debe ser sancionado dependiendo del contexto de su participación, será instigador cuando el por iniciativa misma proponga al que posee las influencias realizar el negocio ilícito, y su conducta se subsumirá en la complicidad, ante la propuesta del traficante, decida aceptar entregar el medio corruptor o beneficio al mismos,

teniendo como excepción que su conducta tiene que ser doloso, esto quiere decir que, tiene que tener conocimiento que su conducta infringe o va contra el ordenamiento jurídico.

Espinoza, (2018) en su artículo científico para Voz Iuris, revista de derecho, presenta un análisis de las razones dogmáticas en torno al tratamiento del tercero interesado en el delito de tráfico de influencias, llegando a concluir que debe aceptarse para el tratamiento de esta figura la accesoriedad limitada, no siendo solamente punible a grado de cómplice ante la aceptación de la propuesta del que invoca tener influencias ya sean reales o simuladas, sino que además, en los casos en los que ante una propuesta del autor, este realice una contraoferta.

Gonzales, (2018) en su tesis de maestría ante la Universidad San Martín de Porres, analiza la posición del interesado en el delito de tráfico de influencias, luego de verificar una serie de sentencias absolutorias, concluye que la conducta del tercero interesado en el delito de tráfico de influencias es irrelevante penalmente, y en contraposición al pronunciamiento de la Corte Suprema en el Plenario N.º 003-2015, no se le podría considerar como instigador en cuanto su participación no se realiza en la fase previa del delito, sino en la ejecución del mismo.

### **1.9. Antecedentes internacionales**

Cugat, (2021) abordó el delito de tráfico de influencias en la legislación española, desde una perspectiva longitudinal durante los veinte años de su regulación, llegando a concluir que representa un tipo penal prescindible, en relación a las dificultades probatorias que resultan de su aplicación, por lo que bien se podrían reconducir dichos supuestos fácticos dentro de delitos ya existentes, como el cohecho, o los delitos típicos de función

Portomeñe, (2016) aborda la figura del tráfico de influencias en Centroamérica, en donde se hace referencia al tercero interesado en dicho delito como el “comprador” para señalar su comportamiento, agrava la figura del autor al momento que realizar el “pago” por las influencias que se le prometen, más no

se hace mención en la regulación centroamericana que deba responder penalmente por su accionar.

Nogales, (2019) en referencia al tráfico de influencias en la legislación ecuatoriana y la posición del tercero interesado en dicho delito, refiere que según su regulación, este delito se centra prioritariamente en sancionar la conducta de los funcionarios públicos que valiéndose de su cargo o las influencias que este le supone, pueden influir en un tercero para lograr un beneficio económico o de cualquier otra índole, siendo un delito especial, en el que en un primer momento la conducta del interesado no merece reprochabilidad penal.

## **PARTE II: DEFINICIONES CONCEPTUALES**

### **2.1.Tráfico de influencias**

Delito tipificado en el artículo 400 del Código Penal Peruano que consiste en la invocación de una influencia real o simulada ante un tercero a efectos de intervenir a favor en un asunto controvertido, injiriendo sobre la una autoridad judicial o administrativa que tenga la jurisdicción y la competencia para resolverlo.

El Magistrado San Martín Castro en la Casación N° 638 – 2018, refiere que “el tráfico de influencias es un delito que afecta la imparcialidad funcional y el carácter público de la función”.

### **2.2.Vendedor de influencias**

También conocido como traficante de influencias es el sujeto activo del delito antes descrito, enmarcando su conducta en los verbos concurrentes de invocar, ofrecer y solicitar influencias a cambio de un beneficio económico a su favor o de un tercero. Cabe precisar que tanto en la legislación nacional como internacional puede tratarse de un funcionario público como de un particular.

Alega tener la capacidad de influir (real o simulada) sobre una autoridad judicial o administrativa en la decisión de un caso, solicitando algo a cambio por lo general con valor patrimonial.

### **2.3.Tercero interesado**

Es la persona interesada en la influencia que ha invocado el vendedor de influencias, aceptando o no las mismas a cambio de realizar una contraprestación a este, a efectos de que interceda por él ante la autoridad encargada de resolver un asunto controvertido en lo judicial o administrativo.

## **2.4.Influencia**

Es aquel poder que tiene una persona sobre una determinada situación concreta, sea por el cargo o por algún vínculo con otra persona, ya sea por cuestiones de amistad, subordinación, poder, entre otros.

La Real Academia Española, en su DICCIONARIO, (2022) la define como “persona con poder o autoridad con cuya intervención se puede obtener una ventaja, favor o beneficio”

## **2.5.Influencia simulada**

Es aquel poder que una persona dice tener sobre una determinada situación concreta, sea por el cargo o por algún vínculo con otra persona, ya sea por cuestiones de amistad, subordinación, poder, entre otros y que le posibilitaría influir en sus decisiones, aunque en la práctica ello sería imposible de materializar.

## **2.6.Sujeto pasivo:**

Es sobre quien recaerá el perjuicio o el daño de la comisión de un acto ilegal es decir el agraviado, en delitos contra la administración pública el agraviado siempre será sin lugar a duda el estado.

## **2.7.Medio Corruptor:**

Es la dádiva o promesa que se entregara o se solicitara, a efectos de interceder ante un funcionario o servidor público, para obtener un beneficio contrario al ordenamiento jurídico. (Definición dada por el tesista).



### **PARTE III: APROXIMACIÓN DOCTRINARIA DE LA REGULACION EN EL PERU.**

#### **3.1.El delito de tráfico de influencias, relevancia y construcción típica en la Regulación Nacional**

El delito de tráfico entro en vigencia a partir del código penal de 1924, en el art. 354-A, en cual se introdujo a partir de una reforma en los años 1981, se piensa que tuvo influencia de la legislación española en su CP 1928, CP italiano de 1930, y teniendo su antecedente en la doctrina colombiana, hasta el actual tratamiento en el artículo 400 de nuestro código sustantivo, lo cual, en necesario realizar un análisis muy minucioso acerca del componente teórico-dogmático de este ilícito penal, y también lo referente a la reprochabilidad de las conductas de los intervinientes en la comisión del este ilícito penal, con la finalidad de corroborar, el correcto tratamiento al que deben someterse. El delito de “tráfico de influencias” se encuentra regulado o tipificado en el artículo 400 de nuestro Código Penal vigente, prescribe:

“El que, invocando o teniendo influencias, reales o simuladas, recibe, hace dar o prometer para sí o para un tercero, donativo o promesa o cualquier otra ventaja con el ofrecimiento de interceder ante un funcionario o servidor público que ha de conocer, esté conociendo o haya conocido, un caso judicial o administrativo, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de seis años”.

En lo tipificado en este citado artículo, se sancionara una conversación, en la que una de partes manifestara que tiene las influencias, estas se han ya reales o simuladas, en una autoridad judicial o administrativa que emitirá una decisión en el caso de interés directo de otro, el cual manifestara que él puede interceder a favor del mismo con el propósito de que sea beneficiado con la decisión, solicitando a cambio una “contraprestación, ventaja o promesa económica” para él o de un tercero.

En la configuración típica de este delito, se configura dos intervinientes: el traficante de las influencias y el que tiene interés de las influencias, la pregunta

es si este tipo penal es un delito que puede ser cometido por cualquier persona que reúna las características típicas para atribuirle una responsabilidad penal (delito común) o tiene que tener características especiales (delitos especiales), esto tiene su origen que el ofertante puede tener un cargo público, pero no es encuentra ejerciendo sus funciones. Por lo cual, Yon (2002), refiere que: “nos encontramos ante un delito común, pero con características especial en relación al sujeto activo, debido que puede ser un intraneus o extraneus, porque lo relevante será las influencias que el manifiesta tener”.

Es necesario recordar que el tipo penal en mención, no requiere una intervención real del intraneus (servidor o funcionario) que tenga a su cargo la decisión, pues ante la intervención del mismo se estaría configurando el delito de cohecho, con esto se quiere decir que el delito se habrá consumado con el simple ofrecimiento de las “Influencias” del sujeto activo, de interceder a favor de un tercero (interesado o comprador) ante un funcionario, no exigiéndose que la conducta de interceder ante el funcionario se concrete.

### **3.1.1. En cuanto al bien jurídico a tutelar**

Al hablar de tráfico de influencias y con el objeto de analizar de forma correcta su tratamiento legal, es necesario establecer una serie de precisiones en cuanto al bien jurídico que tutela, el cual va a representar el contenido material del delito. Un primer punto de análisis será verificar su tratamiento en nuestra legislación penal, la cual lo considera como un delito en contra de la administración pública, al regularlo en el Título XVIII, específicamente en su sección IV en los delitos de corrupción de funcionarios, ello podría llevarnos a pensar que el correcto bien jurídico tutelado es la administración pública o alguna de sus aristas; sin embargo, de la revisión del tipo penal no se encuentra una coherencia interna con ello.

Al respecto Velázquez, (2001) nos refiere que si lo que se sanciona en el artículo 400 de nuestro Código Penal es una conversación entre dos particulares o máximo un funcionario y un particular, pero en el que ninguno está interviniendo en ejercicio de una función pública, cuál

sería la referencia a la Administración Pública en tal construcción típica, máxime si solo se requiere la oferta de influencias, no así la materialización de las mismas.

En tal sentido ha surgido una fuerte discusión en la doctrina, en tanto al no exigir el tipo penal que ninguno de los intervinientes ostente la posición de funcionario o servidor público, cuál sería el nexo que lo vincularía con la administración, para ser considerada esta última como el bien jurídico a tutelar.

Una de las respuestas más aceptadas por la doctrina para resolver tal controversia es la teoría de la institucionalidad de la administración pública, al respecto Montoya, (2005) refiere que la misma va a comprender los principios, deberes y valores que engloban y deben regir la conducta y actividades de los servidores o funcionarios públicos, así lo que debe tutelarse en el tráfico de influencias, a pesar de la no necesaria participación de un funcionario público, es la institucionalidad propia de la administración de conductas que sin generar un perjuicio directo, favorecen a actos de corrupción, presentándola como un ente corruptible, influenciable y por ende débil frente a intereses ilegítimos de particulares, entendiéndose también como una afectación a la buena imagen o prestigio de la institución.

En tal sentido, la Corte Superior Nacional de Justicia Penal ha emitido posición al respecto en el Expediente n.º 0033-2018-50 al determinar que el bien a tutelar en el tráfico de influencias es el correcto funcionamiento del aparato estatal, en tanto la acción típica de este delito va a presentar repercusiones en el aspecto social, al presentar una menor aprobación de la población a la labor de sus autoridades, en el plano político, al generar un resquebrajamiento de los principios democráticos, y frustración de las autoridades en la prevención de delitos contra la administración pública, lo que podría resumirse como una afectación al correcto funcionamiento de la administración pública

con un derrotero en los principios constitucionales que envisten su institucionalidad.

### **3.1.2. Estructura Típica del Tráfico de Influencias**

La estructura típica del delito de tráfico de influencias, requiere que el autor del mismo despliegue tres conductas específicas, las cuales deben concurrir obligatoriamente, para que su conducta sea reprochable penalmente, en tal sentido, ante la ausencia de una de ellas, la conducta carecería de relevancia penal.

#### **a) Invocar influencias**

Esta primera conducta refiere que el sujeto activo del delito invoca influencias sobre una autoridad o funcionario que se encuentre resolviendo un proceso administrativo o judicial y sea el encargado de tomar una decisión en un proceso o procedimiento ante la presencia necesaria de un tercero, quien es el interesado en recibir tal influencia. Cobo & Vives, (1996) señalan al respecto que tal precepto es aplicable tanto al tráfico de influencias real o simulado, en tanto nuestra legislación no hace una distinción en referencia al tratamiento que estos deben recibir.

#### **b) Ofrecimiento de ejecutar tales influencias**

En referencia a las prestaciones ofrecidas por el autor del delito al interesado, haciendo nuevamente precisión en que no es necesario el cumplimiento de las mismas, sino el simple ofrecimiento de las mismas, al respecto García, (2002) señala que nos encontramos ante un tipo penal de estructura subjetiva dolosa, en el que la concurrencia de las influencias y el ofrecimiento de las mismas a cambio de un beneficio configuran el mismo.

### **c) Recibir o solicitar un beneficio a efectos de ejecutar sus influencias**

En referencia al requerimiento del sujeto activo, para activar la influencia que alega, pudiendo emplearse cualquiera de estos verbos rectores para que el delito se considere consumado, en tal sentido Velázquez, (2001) refiere que nos encontramos frente a un delito de conductas alternativas, en las que basta la realización de cualquiera de las descritas, para que se considere como consumado.

#### **3.1.3. La consumación del ilícito**

Analizada la tipicidad del injusto analizado, una siguiente discusión dogmática surge en relación a determinar en qué momento es que se consuma tal ilícito, al respecto San Martín, (2012) refieren que el mismo deberá consumarse con la aceptación del interesado a la propuesta del traficante de influencias de interceder en su favor ante un funcionario o servidor público a cambio de un beneficio económico, en tanto, de no ser así, el traficante de influencias nunca recibiría la promesa, dádiva o ventaja a la que hace referencia el artículo 400 del Código Penal.

Al respecto, posturas como la de Velásquez, (1997) contradicen a ello señalando que nos encontramos ante un delito monosubjetivo, en el cual se exige el cumplimiento del autor de las tres conductas que componen el tipo penal (invocar, ofrecer y solicitar), por lo que alguien distinto al autor no puede consumir el mismo (en referencia a la aceptación o no, del tercero interesado), por lo que una interpretación en contrario sensu representaría una vulneración al principio de legalidad que impone nuestro ordenamiento jurídico penal. De igual forma, el delito señalado contempla un ilícito en el cual el desprendimiento patrimonial del interesado, deviene de la presión que ejerce sobre él, el sujeto activo del mismo; siendo fundamental en el análisis, verificar bajo que supuestos el brinda su consentimiento o no a tal presión.

### **3.2.El tercer interesado y la reprochabilidad de su conducta**

Partiendo justamente de la controversia planteada en el apartado final del análisis presentado en el punto precedente, en lo referente a la consumación del delito de “tráfico de influencias”, surge una nueva interrogante en relación a cuál debería ser el correcto tratamiento en el ámbito penal de la conducta del tercero interesado, por lo cual se analizara las posturas doctrinarias y jurisprudenciales respecto a la misma, en función de la indispensabilidad o no de su conducta para la realización y consumación del tráfico de influencias.

#### **3.2.1. Corte Suprema y su postura en el Plenario n.º 003 – 2015**

En el año 2015, la Corte Suprema de Justicia de la República, trato de dar fin al debate sobre el carácter jurídico de la conducta relevante que posibilita la sanción penal del Tercero Interesado en el “tráfico de influencias”, o mejor dicho cuál debería ser el “título de imputación”, por el cual debería debe recibir una sanción. Así en su noveno fundamento, del A.P. N°. 3-2015, prescribe lo siguiente:

“En este sentido, el tercero interesado en el delito de tráfico de influencias, mejor dicho, quien promete o entrega el donativo, la ventaja o el beneficio al autor, no puede ser considerado cómplice de tal delito (...), en tanto no presta ningún tipo de colaboración en la comisión del delito —o, más concretamente, en la acción típica prevista por el tipo penal—, en la medida que él es partícipe necesario de un delito de encuentro, su colaboración es necesaria, o enmarcada dentro del rol típico, resultaría impune desde la perspectiva de la complicidad”.

La Corte Suprema, fundamenta tal postura, en un análisis de las reglas de la participación delictiva, de conformidad con el artículo 25 del Código Penal, mismo que prescribe como cómplice a: “El que, dolosamente, preste auxilio para la realización del hecho punible, sin el cual no se hubiera perpetrado, será reprimido con la pena prevista para el autor”; analizando tal precepto, el plenario en cuestión refiere que el comprador de influencias nunca podrá cumplir con tal regla del artículo

25, pues para ello tendría que prestar apoyo al vendedor de influencias en la perpetración del ilícito mediante la realización de los verbos rectores anteriormente descritos.

Por lo tanto, este órgano jurisdiccional, refiere que el tercero interesado solo puede responder como instigador, siguiendo estos lineamientos el mismo refiere y reafirma su posición en su fundamento N° 11, en el cual, “en el cual expresa que, el solicitante de las influencias, solo existirá motivo de sanción penal, siempre y cuando el mismo intervenga en la fase preparatoria del delito, y su participación tenga como resultado en el “Sujeto activo la determinación de realizar la influencia”, además de lo expuesto existe la posibilidad, que la conducta del solicitante quede sin una sanción penal, fundamentado su posición en que al no comprobarse, que el solicitante haya determinado la realización del delito, su conducta se impune, añadiendo que se trataría de un supuesto que no es típico.

Cabe precisar, que, en su análisis, la Corte Suprema refiere que, para la reprochabilidad de la conducta del tercero interesado, se requiere que este produzca un influjo psicológico efectivo sobre el vendedor de influencias, que haya determinado que este lleve a cabo la conducta principal consistentes en la oferta de influencias para obtener un beneficio en su favor.

### **3.2.2. La crítica en la doctrina**

Desde diversas perspectivas, el pronunciamiento emitido por la Corte Suprema ha sido objeto de múltiples cuestionamientos, así por su parte, el profesor Reaño, (2004), haciendo referencia a la teoría de la accesoriedad limitada, señala que es factible que se le reproche al interesado como cómplice en el tráfico de influencias, teniendo como punto de partida su aceptación de la propuesta del sujeto activo del delito, al lesionar un bien jurídico de interés penal, vinculado con la institucionalidad de la administración pública.

Ahora bien, bajo los supuestos de esta teoría, se entendería que la actitud del tercero si bien no puede considerarse como pasible de subsumirse en la autoría de un tipo monosubjetivo, si podría encontrar punibilidad en función de una complicidad, contrario a lo dispuesto por la Corte Suprema en el plenario descrito en el punto precedente, de conformidad con las reglas contenidas en el artículo 25 del Código Penal.

Quienes rechazan esta postura, alegan que al no encontrarse regulada taxativamente la conducta del tercero interesado en el delito de tráfico de influencias, al aceptar las influencias ofrecidas, no puede reprocharse penalmente la misma, no obstante, Espinoza, (2018) señala que ello parte de una concepción equivocada que entiende este ilícito como un delito mono-subjetivo, cuando su naturaleza supone una participación impropia de naturaleza necesaria, bajo el cual si es pasible de reproche la conducta del tercero, pese a su no regulación típica.

Finalmente, autores como Muñoz & Bustos, (2010) señalan que contraria a la interpretación de la mayoría de legislaciones y doctrinas, la conducta del interesado en el delito de tráfico de influencias, puede devenir en impune, tomando como punto de partida la estructura típica del ilícito, en relación al señalamiento de que el autor del delito hace dar o prometer al interesado una ventaja, dádiva o beneficio en su favor, lo cual podría incluso subsumirse en un delito de concusión, como reverso de la conducta típica del artículo 400 del Código Penal. Refiriendo con ello que la conducta del tercero no debe reprocharse penalmente, sino por el contrario deberá verificarse su inclusión como víctima del delito.

Un segundo supuesto, que complementaría tal perspectiva es lo señalado en el apartado final del fundamento jurídico 11 del Acuerdo Plenario n.º 003- 2015, en el que señala que cuando la conducta del tercero interesado, no será punible cuando no genere en el autor del delito la convicción o la reafirmación de cometerlo.



### **3.3. INTERVENCION DELICTIVA**

#### **3.3.1. Autoría y participación regulado en el código penal peruano**

Respecto a este punto a tratar, en nuestro ordenamiento se rigen por reglas por las cuales se determina la autoría y la conducta punible accesoria, estas se encuentran como base de la teoría diferenciadora y del concepto restrictivo del autor, las cuales han sido acepta en nuestra legislación.

VASQUEZ, (2019) refiere que en la parte especial del CP, se regula la conducta del autor, no dando lugar a la complicidad e instigación; por lo tanto se aplicara la extensión de punibilidad, regulado en la parte general “art. 24 y ss. del CP”.

Siguiendo los lineamientos de esta investigación en este apartado, trataremos acerca de la regulación vigente, respecto a la participación, citando los artículos siguientes del Código Penal:

#### **ART. 24. INSTIGACIÓN.**

“El que, dolosamente, determina a otro a cometer el hecho punible será reprimido con la pena que corresponde al autor”.

Para determinar la participación bajo la modalidad de instigación es necesario tomar como referencia la “Casación N° 1626 – 2018”, la cual tuvo como ponente al Magistrado San Martín Castro.

En sus fundamento 9.3, dicta los elementos de la instigación, siendo uno de ellos el Elemento Objetivo, que es causar el resultado, través de un influjo psíquico, que se dirige sobre un tercero, con el objeto de que el mismo decida la comisión de un tipo doloso con relevancia penal, por lo tanto se tiene que

generar en el instigado la voluntad de cometer la conducta punible, pero no existirá la instigación si la persona ya se encontraba determina acometer el delito, por lo cual no existiría un aumento de riesgo al bien protegido, es el caso Vladimiro Montesino Torres quien fue asesor de Alberto Fujimori Fujimori, presidente del Perú en la década de los años 90', mediante los videos difundidos en los medios periodismo se puede intuir que él estaba determinado con anterioridad a cometer el “ Tráfico de influencias” direccionados a altos funcionarios del estado.

Por lo cual en el Acuerdo Plenario, materia de investigación en sus fundamentos 10 y 11, sanciona al tercero participante bajo el título de instigador, lo cual deja un vacío abismal de impunidad, respecto a la existencia de una persona que se dedica a traficar influencias (ej.lobbying el cual es ilegal en nuestro país), como se podrá instigar a una persona que se encontraba determina a cometer la conducta prohibida; y el otro elemento es el subjetivo, este consiste en que la conducta del instigador tiene que ser dolosa, esto quiere decir que tenga pleno conocimiento del hecho del cual es participe, al no demostrarse que su conducta fue doloso quedara impune.

**ART. 25. Inc.1.COMPLICIDAD PRIMARIA Y SECUNDARIA**

“El que, dolosamente, preste auxilio para la realización del hecho punible, sin el cual no se hubiere perpetrado, será reprimido con la pena prevista para el autor”.....

Como se puede apreciar en el presente inciso de este artículo de nuestra regulación normativa penal, se infiere que el actuar como cómplice, no quiere decir que se realizase alguno de los verbos rectores que se encuentra en el tipo penal, lo que es reprochable según lo descrito en este artículo bajo comentario, es el favorecimiento al autor con la finalidad de que él, cometa el delito.

ZAFARRONI, RAUL (2012), en su libro, “Manual de Derecho penal - Parte General”, expone que, el cómplice es quien auxilia o coopera dolosamente al injusto doloso de otro”, siguiendo este lineamiento se llega a la conclusión que, el cómplice no realiza una conducta regulada en un tipo penal, lo único por el cual se sancionara penalmente en su apoyo o su colaboración en un injusto penal.

Los delito espéciales solo pueden ser cometidos por personas que reúnan cualidades específicas, por lo cual genera ya de por sí, una barrera infranqueable para la sanción de un interviniente en el delito sin las cualidades especiales.

SALINAS, RAMIRO (2018) expone que, los delitos contra la administración son delitos de encuentro, y que siempre serán cometidos por la concurrencia de dos a más personas, por lo cual recurrirá a la “Teoría del Dominio del Hecho”, plantea por

Roxin, y aplicarla en estos delitos especiales como son contra “administración pública” u delito cometido por agentes con cualidades específicas, no es la más idónea para determinar la autoría o participación.

Por lo cual ROXIN,(2000), postula que la participación de una persona ajena a la administración pública deberá responder penalmente, por su contribución a la infracción de un deber del autor, además manifiesta que la participación tiene como característica principal ser una “ cooperación sin infracción del deber”; y a JAKOBS, el cual refiere que el tercero puede ser sancionado en virtud de la prohibición amplia, esto quiere decir que se debe seguir los lineamientos para determinar la participación según lo regulado en la parte general del Código Penal, Siendo esta tesis las más aceptadas en la doctrina peruana, la cual servirá como fundamento en la teoría de la unidad del título de imputación.

En nuestra normativa a partir del decreto legislativo 1351, se incorpora la “teoría de infracción del deber” planteada por Roxin, y además la “Teoría de la Unidad del Título de Imputación”, la cual se plasma en el inc.3 del nuestro Código Penal, “El cómplice siempre responderá en referencia al hecho punible cometido por el autor, aunque los elementos especiales que fundamenta la penalidad del tipo legal no concurren en él”. Es necesario hacer mención lo que respecta a cómplice primario o secundario, es propio de la teoría del dominio del hecho, que

es aplicable a los delitos comunes, pero tratándose de los delitos especiales que se rigen bajo el lineamiento de “la teoría de infracción de deber” en la cual solo existe el término cómplice.

### **3.4.CASO RELEVANTE**

#### **3.4.1. Caso Vladimiro montesino**

##### **3.4.1.1.Exposición de los hechos:**

Jacqueline Beltrán ex amante de Vladimiro Montesino, conforme a la declaración de “Montesino” en las investigaciones preliminares, en la cual manifestó que “Jacqueline Beltrán” le había presionado para que ayudara a un familiar suyo (Antonio Vera Juárez), para librado de un juicio que era seguido en su contra por el banco del Crédito del Perú, por una deuda ascendente a dos millones de dólares.

Jacqueline Beltrán, manifestó que nunca realizo tal conducta de presionar a su ex pareja para favorecer a su tío (Antonio Vera), que su tío fue el que acudió directamente a Vladimiro Montesino. 5 de marzo de 2003, se llevó a cabo la declaración de la colaboradora eficaz Matilde Pinchi Pinchi, quien fue la secretaria de Montesino y ella manifiesta haber sido la persona de su confianza de Montesino ante el diario la Republica el 18/07/2022. Dicha diligencia se realizó en presencia de Jacqueline Beltrán y de Vladimiro montesino.

Lo más resaltante de las declaraciones de Matilde Pichinche fue acerca del favorecimiento a la excarcelación del hermano de Jacqueline apodado el “Gato Félix” por insistencia de esta para que “Montesino” le ayudara a obtener la libertad.

Añadiendo además que, Montesino le comento acerca de Antonio Vera y que tenía problemas judiciales y económicos.

Ante lo expresado por la “colaboradora Eficaz”, la procesa Beltrán, niega rotundamente que ella haya presionado a “Montesino”, que ella soluciona sus propios problemas.

Ante lo cual el fiscal encargado de las investigaciones Pablo Sánchez Velarde, solicito una pena efectiva contra “Montesino” de 5 años y 4 meses, y para Jacqueline y Antonio, cuatro años de cárcel.

Ante el Pedido del fiscal el Poder Judicial, sentencio ha “Montesino”, a una pena efectiva de 5 años y 4 meses, sanciono a Beltrán bajo el título de instigación a una pena efectiva de cuatro años, y Antonio Vera a una pena suspendida de tres años.

Como se puede apreciar la conducta de los tres procesados, se sancionaron tanto como el beneficiado, el instigador y el autor del tipo penal, no dejando impunidad a alguna de las conductas, la cual en la actualidad no se está aplicando generando en si una impunidad de la persona beneficiada con el “tráfico de las influencias”.

## **PARTE IV: TRATAMIENTO COMPARADO**

Ahora bien, adicional el tratamiento legal y jurisprudencial que presenta en nuestro ordenamiento jurídico la reprochabilidad del comportamiento del tercer interesado en el delito de tráfico de influencias, es igual de trascendental analizar la experiencia comparada en relación al tratamiento de dicha figura y su incorporación o no en los diversos ordenamientos. A continuación, analizaremos algunos ordenamientos jurídicos penales de la región y el mundo en función a dicho propósito.

### **4.1.La experiencia colombiana**

Un primer ordenamiento jurídico que podríamos revisar sería el colombiano, el cual a través de la ley 599-2000 (CP Colombiano), regula en su art. 411 el ilícito de “tráfico de influencias”, señalando la conducta del funcionario público que indebidamente en su favor o de un tercero, use las influencias originadas del cargo función que desempeña obteniendo lucros o beneficios en un asunto de interés sancionando con penas privativas de entre 6 y 12 años y con inhabilitaciones por el mismo periodo de tiempo, cabe precisar que el artículo 411 antes descrito en un inicio, contempla un supuesto en el que el vendedor de influencias al igual que el influenciado son funcionarios públicos; no obstante, en una segunda parte este artículo también hace referencia a un supuesto en el que el vendedor de las influencias es un particular previendo para él penas privativas de libertad que van entre los 4 y 8 años. Además, conforme lo desarrolla la doctrina y jurisprudencia en tal ordenamiento nos encontraríamos ante un delito de mera actividad que se consuma con la sola intervención del funcionario público, en adición a ello, de la interpretación del artículo 411 del código penal colombiano puede entenderse de que a diferencia de lo regulado en el Perú, no se entendería el delito de tráfico de influencias como una venta en las mismas, si no que se entendería que la persona interesada en recibir tales influencias sería justamente aquel funcionario o particular con “interés” en el asunto a cargo del influenciado.



## 4.2.El tratamiento español

Situación similar se aprecia en el ordenamiento jurídico español, mismo que prevé hasta 3 tipos penales para el delito de “tráfico de influencias”:

Tomando como referencia lo dicho por MUÑOZ, FRANCISCO (2015), jurista español, refiere en su libro de “Derecho Penal Parte Especial” que lo regulo en el “Art. 428. “Tipifica la influencia ejercida por el funcionario u autoridad sobre otro funcionario” y en Art.429.”Tipifica la misma conducta pero la realiza un particular”, en los artículos precedentes es notorio que la conducta común en ambos tipos penales es “Influyere”, es decir que lo que se sancionara en ambos es la capacidad de influir ante una autoridad, por el grado de superioridad o la relación personal que tenga con la misma, la cual tiene a su cargo tomar la decisión en un asunto o caso, que se encuentra dentro del ámbito a su labor.

En el Art. 430, en lo que respecta a este articulo a diferencia de los artículos anteriores, el “tráfico de influencias”, no se regula tomando como base “la autoridad o superioridad” sobre la autoridad que será influenciada, si no a título particular, esto quiere decir que la realización de la conducta descrita será solo en el ámbito privado y puede que la influencia sea real o simula; además los sujetos intervinientes en este supuesto no se encuentran en función de autoridad u superioridad o alguna relación personal con la autoridad encargada de tomar la decisión; pero el delito se consuma con el ofrecimiento de las influencia y la solicitud o aceptación del traficante algún medio económico, por parte de un tercero

Como se puede apreciar que los art. 428 y 429, expuestos anteriormente pertenecientes al sistema penal español al igual que la legislación colombiana hacen referencia a una influencia con beneficio directo o indirecto para aquel que la solicita, y en el artículo 430 el mismo que puede ser equiparado con el ordenamiento jurídico peruano, se necesitara la presencia de un traficante o influencias que pueden ser intraneus o extraneus y la presencia de un tercer interesado, los mismos ofrecen influir(real o simulada) en un funcionario o servidor público encargado de tomar la decisión en un caso materia de interés del comprador de las mismas.

Es por ello, que para el presente análisis conviene centrarnos en el artículo 430 del ordenamiento jurídico penal español mismo que hace referencia a una venta de influencias y la existencia de un vendedor así como de un interesado; sin perjuicio de tal diferenciación debemos precisar que al igual que en el ordenamiento jurídico peruano solamente el tipo objetivo hace referencia a la sola reprochabilidad de la conducta del comerciante o traficante de las influencias no emitiendo pronunciamiento alguno en relación a la reprochabilidad del comportamiento del tercero interesado en recibir tal influencia. Por otro lado, se debe precisar que al igual que en el ordenamiento jurídico colombiano en el español expresan que nos encontramos ante un delito de mera actividad.

#### **4.3.En la legislación Argentina**

En la normativa argentina en su código actual de 1921 no se regulo respecto al tráfico de influencias, pero en el año 1999 se introdujo por primera vez, teniendo como iniciativa la regulación sobre “La ética de la función pública”.

Esta figura de tráfico de influencias se encuentra regulo en su art.256 dictando:

Inc.1. “Será reprimido con reclusión de uno a seis años e inhabilitación especial perpetua para ejercer la función pública, el que por sí o por persona interpuesta solicitare o recibiere dinero o cualquier otra dádiva o aceptare su influencia ante un funcionario público, a fin de que este haga, retarde o deje de hacer algo relativo a sus funciones”.

Inc.2. “Si aquella conducta estuviera destinada a hacer valer indebidamente una influencia ante un magistrado del poder Judicial o del Ministerio Público, a fin de obtener la emisión, dictado, demora u omisión de un dictamen, resolución o fallo en asuntos sometidos a su competencia, el máximo de la pena prisión o reclusión se elevará a doce años”.

Se puede desprender de los artículos citados anteriormente, que en comparación con nuestra legislación peruana en la cual la consumación del delito es con la simple invocación de tener influencias, y no el resultado de la intersección, en la legislación argentina es todo lo contrario, pues este tipo penal gira totalmente dentro la influencia real y no en la simulada, esto quiere decir que ante la invocación de influencia si habrá interferencia en la administración de justicia lo cual es totalmente diferente a nuestra legislación vigente pues en ella se también se regula las influencias simuladas.

Es necesario hacer mención que en la legislación argentina como en la nuestra, no existe ninguna sanción penal u otra, para el tercero interesado (comprador), existiendo en dicha regulación un vacío legal como en nuestro ordenamiento jurídico.

#### **4.4.La regulación Uruguay**

En Uruguay, la regulación acerca de la conducta del traficante de influencias, se encuentra regulado en su código penal 1933, vigente actualmente, en el artículo N°158, bajo el tipo penal de “tráfico de influencias”, dictando lo siguiente:

## Art.158. TRAFICO DE INFLUENCIAS

INC.1.”El que, invocando influencias reales o simuladas, solicita, recibe por sí mismo o por otro, para sí o para otro, provecho económico, o acepta su promesa, con el fin de influir decisivamente sobre un funcionario público para retardar u omitir un acto a su cargo, o por ejecutar un acto contrario al mismo, será castigado con tres meses de prisión a cuatro años de penitenciaría”.

INC.2. “La pena será reducida de un tercio a la mitad cuando se acepte la retribución, con el fin de influir decisivamente, para que el funcionario público ejercite un acto inherente a su cargo”.

Lo tipificado en este artículo, es similar a lo regulado en nuestra legislación, respecto al hecho que, este delito puede ser cometido por cualquier persona (un delito común), pero la conducta tipificada, es más específica respecto del funcionario que se pretender influir, además existe una diferencia en la sanción penal, en nuestra legislación la pena aplicable a cada caso es de 4 años como mínimo.

En el segundo inciso de este tipo penal, se regula la conducta del interesado siendo él que acude, al traficante con la finalidad de que este último interceda, a cambio de una retribución, existiendo dos conductas reguladas en el tipo penal bajo comentario, asemejándose a tipo penal de cohecho. En la regulación bajo comentario no existe una sanción penal aplicable al tercero interesado como en nuestro código penal.

### CAPITULO III: ANÁLISIS DE RESULTADOS

Con la finalidad de alcanzar los objetivos y fines planteados en el primer capítulo del presente trabajo de investigación, se procedieron a aplicar los instrumentos descritos en el apartado 1.9 con la finalidad de poder determinar de una mejor manera cual es el tratamiento que debe de presentar “la conducta del tercero interesado en el delito de tráfico de influencias”.

Bajo tal perspectiva, en el presente capítulo se expondrán los resultados de investigación a los que se han arribado de la aplicación de los instrumentos, partiendo de la caracterización de los sujetos intervinientes, así como las instituciones en donde se procedió a la aplicación de los mismos.

#### INFORMACIÓN DEMOGRÁFICA

La presente investigación se centró en el ámbito y jurisdicción de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, en concordancia con lo establecido en el tercer objetivo específico de la investigación, esto es: verificar la apreciación de los que brindan su servicios jurídicos a la región de Lambayeque, en lo correspondiente al tratamiento de la conducta del tercero interesado en el delito de “tráfico de influencias”, para ello se contó con el apoyo de jueces, abogados y fiscales penales, en función a la siguiente tabla:

Tabla 1. Relación de jueces, fiscales y abogados entrevistados.

#	Cargo	Nombre Completo	Código
1	Jueces Penales	Cruzado Portal Martin Tonino	JP001
2		Severino Vargas Calderón	JP002
3		Juan Eduardo Valdera Olivos	JP003
4		Carlos Larios Manay	JP004
5		Dante Cajusol Santisteban	JP005
6		Ronald Erik Ruiz Vásquez	JP006
7		Ingrid Janet Merino González	JP007
8		Juan Alex Cubas Bravo	JP008
9	Fiscales Penales	Luisa Liliana Nina Ticona	FP001
10		Luvis Segundo Mesta Correa	FP002
11		Miguel Prado Silva	FP003
12		Patricia Carrillo Béjar	FP004
13	Abogados	José Francisco Gálvez Herrera	AP001
14	Litigantes	Ivan Guzmán Delgado	AP002

15		Eleazar Mera Delgado	AP003
16		Luis Morón Mora	AP004
17		Rosio Quevedo Tineo	AP005
18		Camilo Hoyos Altamirano	AP006
19		Galo Juvenal Custodio La Torre	AP007

A efectos de cumplir con los objetivos de nuestra investigación, los 19 profesionales de derecho que conformaron la misma fueron sometidos a una entrevista de 14 interrogantes a efectos de que puedan expresarnos su postura en “Relación al tratamiento que se le debe dar a la conducta del tercero interesado en el delito de tráfico de influencias”, siendo que los resultados obtenidos se exponen de manera sintética y detallada a continuación.

## RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

A continuación, se presentarán los resultados recopilados de la presente investigación, para ello se hará uso de tablas de información que condensen las respuestas de los entrevistados, debiendo tenerse en consideración que ha efectos de dinamizar los mismos, se consignarán las ideas centrales de las respuestas obtenidas, más no la transcripción literal de las mismas, de igual forma como anexo al presente trabajo se adjuntan las guías de entrevista de cada uno de los participantes

En dicho sentido, como primera pregunta de investigación, se cuestionó a los entrevistados si partiendo de la configuración típica del artículo 400 del Código Penal, ¿Tal fórmula típica cumple con los criterios de taxatividad que nos permita identificar el tratamiento penal de la conducta de cada uno de los intervinientes en el delito de tráfico de influencias? ¿Por qué?

Tabla 2. Respuesta a la interrogante N° 1 de la entrevista realizada.

Respuestas interrogante n.º 1		
<i>Código</i>	<i>Respuesta</i>	<i>Justificación</i>
JP001	Sí	Se encuentra redactado en función a la autoría del vendedor de influencias
JP002	Sí	En tanto presenta supuestos de hechos, los elementos objetivos y subjetivos del ilícito como la consecuencia jurídica.
JP003	Sí	En tanto detalla específicamente los verbos rectores para el tipo base y agravado.
JP004	No	Solo regula la conducta del autor

JP005	Sí	En tanto el tipo penal solo puede y debe describir la conducta del autor.
JP006	No	Se hace mención al sujeto activo y al tercero, no obstante, no prevé sanción para este último.
JP007	Sí	En tanto exige la presencia de tanto vendedor como comprador de influencias.
JP008	Sí	Es taxativo lo descrito en la norma y permite la diferenciación de la infracción de cada uno.
FP001	Sí	En tanto si bien solo prevé la conducta del autor, la doctrina ha ayudado en la determinación de la conducta del cómplice.
FP002	Sí	Define adecuadamente la conducta del vendedor como sujeto activo y la del comprador como instigador del delito.
FP003	Sí	----- -----
FP004	Sí	El tipo penal es específico
AP001	Sí	En tanto especifica a los participantes, aunque siempre se presentan vacíos legales.
AP002	Sí	Porque se detalla las conductas sancionables y las consecuencias a aplicar
AP003	Sí	Permite la identificación de los intervinientes, tanto del vendedor como del interesado en las influencia
AP004	No	En tanto solo se prevé la conducta del autor del delito
AP005	Sí	Toda vez que permite determinar la conducta del autor del delito
AP006	Sí	Porque hace referencia a los sujetos de la administración pública
AP007	Sí	Porque se está tratando de determinar en la ley.

*Fuente: Elaboración Propia*

**Comentario:** Como se puede apreciar en su mayoría la muestra de investigación considera que el artículo 400 del Código Penal cumple con los criterios de taxatividad que permitan identificar el tratamiento de la conducta de los intervinientes, no obstante, si apreciamos las justificaciones a tal respuesta señalan en unanimidad a que ello permite identificar la conducta del autor del delito (vendedor de influencias) así como los supuestos subjetivos y objetivos del tipo y la consecuencia jurídica a

aplicar, surgiendo las discrepancias en relación al tratamiento del tercer interesado, el cual si bien consideran indispensable, reconocen que no se encuentra correctamente regulada la reprochabilidad de su conducta.

Una segunda interrogante cuestionaba desde la experiencia de los entrevistados ¿Cuál es el rol y protagonismo que juega la conducta del tercero interesado en el delito de tráfico de influencias? ¿Resulta su actuación indispensable? ¿Por qué?

Respuestas interrogante n.º 2	
<i>Código</i>	<i>Respuesta</i>
JP001	El tercero, puede actuar como instigador (si el autor no tenía intención de cometer el ilícito) o como cómplice (reforzando su voluntad).
JP002	Su actuación es indispensable como instigador.
JP003	Sí, por el favorecimiento
JP004	Sí, porque sin su intervención no se cumple la estructura típica del delito
JP005	Es indispensable, no obstante, el tipo penal sanciona la conducta del autor, la cual puede estar preconstituida antes de la intervención del tercero.
JP006	Su participación es a grado de instigador o cómplice, salvo cuando actúa bajo error.
JP007	Su rol deriva de la aceptación que pueda realizar a las influencias que se le invocan.
JP008	Sí, porque este promete algo a cambio de que se interceda ante un funcionario.
FP001	Su participación es indispensable si él solicita la influencia, sino deberá evaluarse su participación.
FP002	Sí, porque sin su compra de influencias no se cumple la estructura típica del delito
FP003	No es indispensable en tanto puede o no aceptar las influencias
FP004	Es indispensable, siempre en el caso específico
AP001	Sin su participación no se cumpliría el tipo
AP002	Contribuye con la creación del riesgo prohibido al bien jurídico.
AP003	-----
AP004	Es indispensable en casos en que su no actuación suponga la no realización del tipo, caso contrario su conducta es irrelevante penalmente.
AP005	Es necesaria, más no indispensable, en tanto no siempre se requiere
AP006	Sí, porque su interés es llegar a su objetivo a través de otra persona
AP007	Es indispensable, porque es el beneficiado.



Tabla 3. Respuesta a la interrogante N° 2 de la entrevista realizada.

Comentario: Como se puede apreciar, de forma mayoritaria se señala como trascendental la participación del tercero interesado en el delito de tráfico de influencias, en tanto se refiere que sin su participación no se podría dar cumplimiento al tipo objetivo del ilícito, no obstante, es importante lo señalado en la respuesta de JP007, en la que se reconoce que su indispensabilidad deriva de la aceptación que pueda dar a las influencias solicitadas, en tanto como también reconoce AP004 existen supuestos en los que su conducta pueda devenir en irrelevante penalmente.

Una tercera interrogante, cuestionaba en función a la respuesta anterior ¿Es la conducta del tercero interesado relevante penalmente? ¿Por qué?

Tabla 4. Respuesta a la interrogante N° 3 de la entrevista realizada.

Respuestas interrogante n.º 3		
<i>Código</i>	<i>Respuesta</i>	<i>Justificación</i>
JP001	Sí	En tanto su conducta tanto como si hace nacer la determinación (instigador) o la refuerza (cómplice) en el autor, no es neutral.
JP002	Sí	En tanto sin el interés de comprar, desaparece el delito.
JP003	Sí	Porque su participación es fundamental en el delito.
JP004	Sí	Siempre que actúe como instigador del delito
JP005	Sí	Su relevancia radicaría en ser el beneficiario de la influencia
JP006	Sí	En tanto también es beneficiario o se beneficia del ilícito
JP007	Sí	En caso sea quien proponga o convenza al sujeto activo del ilícito.
JP008	Sí	----- -----
FP001	Sí	Ello dependerá de las circunstancias que rodeen a la comisión del ilícito
FP002	Sí	Al responder como instigador
FP003	Sí	----- -----
FP004	No	Al no estar subsumida en el tipo penal
AP001	Sí	Al ser el actor principal en la comisión del ilícito

AP002	Sí	En tanto en función a su participación puede ser responsable, como impune
AP003	Sí	Porque es quien saca provecho de la influencia
AP004	No	En función a que no está prevista su responsabilidad
AP005	No	No es relevante, pero será necesaria si el caso lo amerita
AP006	Sí	Porque sin él no se cumple el objetivo
AP007	No	En tanto no lo determina el tipo penal

*Fuente: Elaboración Propia*

Comentario: Como se puede ver, existen posturas divididas en relación a la relevancia penal del tercero interesado, quienes defiende que si existiría tal relevancia señalan que estaría en función a su rol principal en la comisión del ilícito y al ser el beneficiario de la influencia ofrecida, mientras quienes refieren que no es relevante penalmente justifican su posición en la falta de remisión expresa a su conducta en el tipo penal existente en el artículo 400 del Código Penal, considerando la existencia de un vacío legal al respecto.

La cuarta interrogante se presentó en relación a lo señalado por la CSJ de la República señalo en el Acuerdo Plenario n.º 03-2015 que la conducta del tercero interesado no cumple con los reglas de la participación criminal, razón por la cual existiría la imposibilidad de que responda bajo el título de cómplice, ¿Comparte dicha postura? ¿Por qué?

Tabla 5. Respuesta a la interrogante N° 4 de la entrevista realizada.

Respuestas interrogante n.º 4		
<i>Código</i>	<i>Respuesta</i>	<i>Justificación</i>
JP001	No	Depende de la acción específica desplegada por el tercero para verificar si su conducta es reprochable como instigador o cómplice del autor.
JP002	Sí	No puede ser cómplice, puesto que refuerza la actividad criminal del traficante de influencias.
JP003	No	Tienen que analizarse las circunstancias de cada caso
JP004	Sí	Siempre que determine en el autor la intención de cometer el ilícito
JP005	Sí	Si cumple con las reglas de participación criminal, pero a título de instigador
JP006	-	La norma presenta un vacío legal, en

		tanto la conducta del tercero no encaja en el tipo penal, pese a que sin su actuación el delito no se consuma.
JP007	Sí	El partcipe es quien desarrolla el papel de facilitador y no el que ejecuta el delito
JP008	No	En tanto su participación es indispensable en la comisión del ilícito
FP001	No	En tanto, determinadas circunstancias hacen posible su reprochabilidad como partcipe del delito
FP002	Si	En tanto cumple con las reglas de participación a manera de instigador, más no de cómplice.
FP003	Sí	-----
FP004	Sí	-----
AP001	No	En tanto busca un objetivo
AP002	No	En tanto la participación criminal abarca tanto complicidad como instigación
AP003	Sí	Porque ya no se hablaría de un tercero interesado, sino de un cómplice con conocimiento del delito para sacar provecho del mismo.
AP004	Sí	En tanto la construcción típica del delito, no abarca la complicidad
AP005	No	En tanto, la conducta del artículo 400 regula la conducta del autor y no del tercero
AP006	No	En tanto existen vacíos legales en la construcción típica del delito
AP007	No	Porque su participación es necesaria

*Fuente: Elaboración Propia*

Comentario: Se hace la precisión que la instigación, igual que la complicidad son formas de participación delictiva reguladas en nuestro cogido sustantivo, ahora bien, en tanto el plenario sujeto a análisis refiere que la figura adecuada para el tercero interesado es la del instigador, hay quienes sostienen que debido a la peligrosidad de su conducta y el conocimiento de lo ilícito de su accionar cumple con los presupuestos para responder bajo el título de cómplice.

En dicho sentido, la quinta interrogante cuestionaba que el AP n.º 03-2015 señala que la conducta del tercero interesado puede devenir en impune, cuando este se haya limitado a aceptar la propuesta realizada por el denominado vendedor de influencias, ¿Comparte dicha postura? ¿Por qué?

Tabla 6. Respuesta a la interrogante N° 5 de la entrevista realizada.

Respuestas interrogante n.º 5		
<i>Código</i>	<i>Respuesta</i>	<i>Justificación</i>
JP001	No	En tanto no es un hecho neutral, sino que incentiva la conducta
JP002	No	En tanto al fortalecer la conducta, no podría devenir en impune
JP003	Sí	Deviene en atípico
JP004	Sí	Porque no cumple ningún supuesto de tipicidad.
JP005	No	Considero que debe preverse su conducta en la norma penal
JP006	Sí	Debe verificarse en cada caso el beneficio doloso que haya podido obtener
JP007	No	Existe una concepción errónea del delito de tráfico de influencias
JP008	No	Solo cuando actúo bajo error de tipo o prohibición
FP001	Sí	En tanto no siempre será reprochable su conducta, debe evaluarse cada caso
FP002	Sí	Sería una acción no punible
FP003	Sí	No resulta una participación necesaria
FP004	No	Debe analizarse el caso en concreto
AP001	No	-----
AP002	No	----- Pues refuerza la conducta al aceptar las influencias
AP003	No	Pues tiene conocimiento del ilícito
AP004	No	Debe regularse el tráfico de influencias pasivo
AP005	Sí	No posé dominio del hecho
AP006	No	Pues tiene conocimiento de lo ilícito de la propuesta
AP007	No	Es parte del ilícito

*Fuente: Elaboración Propia*

Como sexta pregunta se refiere que: La Corte Suprema en el citado Acuerdo Plenario n.º 03-2015 dicta que el título de imputación bajo el que debería atribuirse al tercero interesado es el de instigador, ¿Comparte dicha postura? ¿Por qué?

Tabla 7. Respuesta a la interrogante N° 6 de la entrevista realizada.

Respuestas interrogante n.º 6		
<i>Código</i>	<i>Respuesta</i>	<i>Justificación</i>
JP001	Sí	En casos en que el autor no tenga planificado el delito y sea el tercero quien haga nacer en el la idea de delinquir
JP002	Sí	En tanto refuerza la intención del autor
JP003	Sí	Tiene un rol dentro del iter criminis
JP004	Sí	Cumple con las reglas de la participación criminal
JP005	Sí	Porque no colabora en el ilícito, sino refuerza la voluntad del autor
JP006	Sí	Debe sancionársele bajo tal condición
JP007	No	Debe responder como cómplice primario
JP008	Sí	-----
		-----
FP001	No	Depende de la conducta, pero me inclino más por la figura de cómplice
FP002	Sí	Las críticas vienen más de una concepción social moral que jurídica
FP003	No	En tanto es quien acepta la propuesta
FP004	Sí	Promueve la conducta del que cometerá el delito
AP001	No	Es cómplice
AP002	No	-----
		-----
AP003	Sí	Es instigador
AP004	No	Es sujeto pasivo del delito
AP005	Sí	Solo en los casos en los que refuerce la actitud del autor
AP006	No	Es cómplice al ser el mayor interesado
AP007	No	En tanto no incite a cometer el ilícito

*Fuente: Elaboración Propia*

**Comentario:** Existen, como se puede apreciar, posturas divididas en relación al pronunciamiento de la Corte Suprema en relación a la determinación de la reprochabilidad de la conducta del tercero interesado, en tanto se defiende que en ciertos escenarios dicha reprochabilidad debe darse bajo el título de instigación, pero también se reconoce que la no determinación adecuada de dicha conducta en el tipo del 400 del Código Penal, puede suponer distintas interpretaciones a la controversia, las cuales no siempre se orientarán hacia la instigación como el título de imputación más adecuado.

Una séptima interrogante planteaba que, en base a su experiencia, respondan ¿Cuál es el tratamiento que se le viene dando al tercero interesado en el delito de tráfico de influencias en la práctica diaria de los tribunales en nuestro ordenamiento jurídico? ¿Por qué?

Tabla 8. Respuesta a la interrogante N° 7 de la entrevista realizada.

Respuestas interrogante n.º 7	
<i>Código</i>	<i>Respuesta</i>
JP001	Ello depende de los hechos desplegados, atribuyéndole el título de imputación de cómplice o instigador.
JP002	Como instigador
JP003	Instigador
JP004	En algunos casos es acusado como instigador
JP005	Como instigador
JP006	No he visto dicho tipo penal en el juzgado colegiado
JP007	No he visto dicho tipo penal
JP008	No he tenido procesos a cargo
FP001	No conozco dichos casos
FP002	Depende de la convicción de los magistrados en función a los hechos
FP003	No he visto casos por la especialidad
FP004	No he visto casos por la especialidad
AP001	Existe impunidad por vacíos legales
AP002	Depende de la jurisprudencia
AP003	Como cómplice
AP004	No he visto a la fecha que se haya imputado el tipo al tercero
AP005	No existe una clara imputación, pese a que la normativa señale la figura de instigación
AP006	Quedan exentos de responsabilidad
AP007	Se les imputa instigación.

*Fuente: Elaboración Propia*

**Comentario:** Si bien se reconoce que un porcentaje significativo refiere no tener frecuente contacto con casos penales por el delito de tráfico de influencias, se aprecia que el restante de la muestra refiere que el tratamiento actual que se da al tercero interesado es de cómplice o instigador del delito, en función a la conducta desplegada y la convicción de los magistrados apoyados en el plenario.

La octava pregunta de investigación, cuestionaba si ¿Considera que la conducta del tercero interesado en el delito de tráfico de influencias, va a presentar siempre la misma reprochabilidad? ¿Por qué?

Tabla 9. Respuesta a la interrogante N° 8 de la entrevista realizada.

Respuestas interrogante n.º 8	
<i>Código</i>	<i>Respuesta</i>
JP001	Depende del caso en concreto se graduará la sanción en función al título de instigador o cómplice que se le impute.
JP002	Sí, siempre tendrá que ser reprochada su conducta
JP003	No, en tanto deben analizarse las circunstancias
JP004	No siempre, solo será reprochada como la de instigador
JP005	No siempre, deberá reprocharse cuando actúe dolosamente para obtener un beneficio
JP006	-----
JP007	Sí, en referencia a lo prescrito en el tipo penal
JP008	Depende de su conducta en cada hecho
FP001	Va a estar definida en función a la determinación o no que haga sobre el vendedor
FP002	No, en tanto es sujeto pasivo del delito
FP003	Depende de cada caso en concreto
FP004	Sí
AP001	Sí, en función a lo antijurídico de su acción
AP002	Sí
AP003	Sí, en tanto sin él no puede cometerse el hecho ilícito
AP004	Se debe analizar el caso en concreto
AP005	Sí, al ser el beneficiario directo
AP006	No
AP007	No

*Fuente: Elaboración Propia*

Comentario: Existe una tendencia a señalar que en función a la no adecuada precisión sobre el tratamiento que va a recibir la actuación del tercero interesado, esta va a tener que ser determinada en atención a las circunstancias particulares de su comportamiento en cada hecho concreto, no existiendo unanimidad en relación al grado de reprochabilidad, ni el título de imputación bajo el cual deberá responder.

La novena interrogante, iba en relación a si ¿Dicho tratamiento genera una suerte de sobre criminalización o una excesiva impunidad de la conducta del tercero interesado en el delito de tráfico de influencias en el derecho penal peruano?

Tabla 10. Respuesta a la interrogante N° 9 de la entrevista realizada.

Respuestas interrogante n.º 9	
<i>Código</i>	<i>Respuesta</i>
JP001	De aplicarse correctamente las reglas de la participación criminal, no se sufriría de impunidad, ni sobre criminalización

JP002	Ninguno de los dos
JP003	No, porque el artículo lo determina
JP004	No, pues las conductas están previstas en la parte general y especial del delito
JP005	Debe incluirse su comportamiento en el tipo penal al ser necesaria su participación
JP006	Cada caso es singular y deberá valorarse de dicha manera
JP007	No genera sobre criminalización
JP008	No, en función al principio de tipicidad
FP001	Ninguna de las dos
FP002	Solo nos encontramos ante un tipo penal complejo
FP003	No
FP004	Se analiza cada caso en concreto
AP001	Impunidad, al no sancionarse adecuadamente al tercero
AP002	Impunidad en la conducta del tercero interesado
AP003	Ninguna de las dos
AP004	Considero que sí
AP005	No
AP006	Sí, al ser beneficiado el tercero
AP007	Sí, al no sancionar adecuadamente al tercero interesado

*Fuente: Elaboración Propia*

Comentario: No existe un consenso en relación a si el actual tratamiento y sanción penal de la conducta del tercero con interés en la decisión, genera una suerte de impunidad o sobre criminalización de su conducta, sin embargo, existe un consenso en que una adecuada y correcta tipificación permitirá una mejor administración de justicia y suplir los vacíos legales existentes.

La décima interrogante cuestiona si, ¿Considera que es necesaria una correcta determinación del título de imputación en base a la que debe responder el tercero interesado en el delito de tráfico de influencias?

Tabla 11. Respuesta a la interrogante N° 10 de la entrevista realizada.

Respuestas interrogante n.º 10		
<i>Código</i>	<i>Respuesta</i>	<i>Justificación</i>
JP001	Sí	Depende que se identifique adecuadamente la conducta que despliegue el interesado.
JP002	No	Considero adecuada la determinación como instigador
JP003	No	Se rigen adecuadamente por la instigación
JP004	No	Está correctamente definido a título de instigador
JP005	Sí	Porque al no existir una norma exacta,



		queda en manos del juzgador con apoyo del plenario determinar el título de imputación
JP006	Sí	Es necesario que se regule como cómplice primario
JP007	Sí	-----
JP008	Sí	-----
FP001	No	Es necesario realizar mayores precisiones
FP002	Sí	Ya se ha determinado que responde como instigador
FP003	Sí	-----
FP004	Sí	-----
AP001	Sí	Por los vacíos legales existentes
AP002	Sí	Es necesario determinar claramente su responsabilidad
AP003	Sí	Debe regularse bajo el criterio de cómplice
AP004	Sí	En tanto no se determina correctamente
AP005	Si	-----
AP006	Sí	Existen deficiencias actualmente
AP007	Sí	-----
		-----

*Fuente: Elaboración Propia*

Comentario: como ya se había adelantado en la respuesta anterior existe un consenso en torno a la necesidad de describir adecuadamente la actuación típica del tercero interesado en el delito de “tráfico de influencias” a efecto evitar vacíos legales que supongan impunidad o sobre criminalización de tales conductas.

La undécima interrogante, cuestiona ¿Bajo qué criterios debe regularse la responsabilidad del tercero interesado en el delito de tráfico de influencias en el derecho penal peruano?

Tabla 12. Respuesta a la interrogante N° 11 de la entrevista realizada.

Respuestas interrogante n.º 11	
<i>Código</i>	<i>Respuesta</i>
JP001	Bajo las reglas de la complicidad e instigación en el marco de la participación criminal
JP002	Como instigación
JP003	En tanto obtiene un beneficio, deber ser considerado dentro de la parte activa del delito
JP004	No es necesaria una regulación diferente a la actual
JP005	Debería incluirse una conducta típica adicional para aquel que se beneficia ilícitamente de la conducta del autor
JP006	Deberá tenerse en consideración el dolo en su conducta, o la existencia de errores de tipo o prohibición
JP007	Cómplice primario
JP008	Ya está descrito en la norma
FP001	Debe ser en función a los hechos y acciones desplegadas en el caso en concreto
FP002	Lo ya establecido en función al principio de legalidad y lesividad
FP003	Sí
FP004	De acuerdo a lo regulado en el art.24 y ss, del CP.
AP001	Si, en función a la atribución de una responsabilidad directa
AP002	Se deberá tener en consideración las reglas de la responsabilidad penal
AP003	Debe regularse bajo el criterio de cómplice
AP004	Bajo criterios de taxatividad y responsabilidad penal
AP005	De acuerdo al aporte realizado en cada caso en concreto
AP006	En función a criterios de responsabilidad directa
AP007	Tipificar en función a su grado de participación.

*Fuente: Elaboración Propia*

**Comentario:** Si bien, hay quienes consideran que la actual regulación normativa y los fundamentos expresado por la “Corte Suprema” en el plenario del análisis refleja el adecuado tratamiento que se le debe dar a la conducta del “tercero interesado” en el delito de tráfico de influencias, también existen quienes cuestionan tal posición señalando que lo que hace el plenario es dar la posibilidad a esta conducta adecuándola en función a cada caso concreto.

Bajo tales premisas, se planteó como doceava interrogante: ¿Cuál sería a su entender, el título de imputación bajo el que debería reprocharse en nuestro ordenamiento jurídico la responsabilidad del tercero interesado en el delito de tráfico de influencias o su conducta deviene en impune?

Tabla 13. Respuesta a la interrogante N° 12 de la entrevista realizada.

Respuestas interrogante n.º 12	
<i>Código</i>	<i>Respuesta</i>
JP001	Depende de su conducta como instigador o cómplice primario
JP002	Instigador
JP003	Instigador
JP004	Instigador
JP005	Debería incluirse un tipo penal que sancione su beneficio ilícito
JP006	Instigador
JP007	Instigador o cómplice primario
JP008	Según lo describe la norma
FP001	La responsabilidad varía en función a su acción en cada caso en concreto
FP002	Como instigador
FP003	Cómplice primario
FP004	Instigador
AP001	Cómplice primario
AP002	Depende en función a la acción desplegada y acreditada en la investigación
AP003	Cómplice primario
AP004	A carácter doloso (instigador o cómplice)
AP005	Como partícipe
AP006	Cómplice primario
AP007	Participe

*Fuente: Elaboración Propia*

**Comentario:** No existe unanimidad en relación a determinar si la conducta del tercer interesado en el delito de tráfico de influencias debe ser reprochada bajo el título de imputación de instigación o complicidad en nuestro ordenamiento y ello se debe a que como se ha señalado, nos encontramos frente a un delito complejo en el que será la acción que despliegue este tercer interesado en cada una de las actuaciones que realicen es la que va a determinar el título de imputación bajo el cual deberá responder penalmente; existiendo sí un consenso en señalar que su conducta no puede devenir en impune.

Como treceava pregunta, se cuestionó: ¿Qué beneficios acarrearía en la población peruana una idónea determinación de la responsabilidad del tercero interesado, en el delito materia de esta entrevista?

Tabla 14. Respuesta a la interrogante N° 13 de la entrevista realizada.

Respuestas interrogante n.º 13	
<i>Código</i>	<i>Respuesta</i>
JP001	Fortalecimiento de la credibilidad en el sector justicia
JP002	Preventivo y disminuir la corrupción
JP003	Preventivo
JP004	Ninguna, es adecuada la normativa vigente
JP005	Evitar impunidad en la conducta del tercero
JP006	Generaría mayor consciencia social
JP007	Adecuada imputación y juzgamiento
JP008	Evita la impunidad
FP001	Mejoraría la calificación de la conducta
FP002	Generaría sobre criminalización
FP003	Preventivo
FP004	Preventivo
AP001	Repercusión positiva
AP002	Generaría convicción y confianza en la sociedad
AP003	No genera repercusión
AP004	Sería adecuado que se prevea un tipo pasivo de la conducta
AP005	Preventivo
AP006	Positiva y de seguridad
AP007	Preventivo y cese de impunidad

*Fuente: Elaboración Propia*

**Comentario:** Los profesionales del derecho que nos apoyaron en la presente investigación, consideran que las repercusiones sociales que traería la correcta determinación del título imputación bajo el cual se deberá reprochar “la conducta del tercer interesado”, serían positivas en función a los fines preventivos de dicha conducta, permitiendo a su vez generar hoy mayor confianza en la sociedad al reducir los índices de impunidad.

Finalmente, la última pregunta refiere ¿Si se tipificaría una responsabilidad penal al tercero interesado en el delito en mención, cual serían los beneficios que traería consigo dicha regulación en el ámbito de la práctica del derecho?

Tabla 15. Respuesta a la interrogante N° 14 de la entrevista realizada.

Respuestas interrogante n.º 14	
<i>Código</i>	<i>Respuesta</i>
JP001	Mejor administración de justicia
JP002	Sanciones adecuadas al tercero interesado en función a la reprochabilidad de su conducta
JP003	Mejor administración de justicia
JP004	Ninguna, es adecuada la normativa vigente

JP005	Debería cerrarse la discusión a través de la fijación de un tipo que castigue el beneficio ilícito del tercero interesado
JP006	Existiría claridad en el título de imputación y sanciones más proporcionales
JP007	Adecuada administración de justicia
JP008	Evita la impunidad
FP001	Permitiría una mejor subsunción de la conducta en el tipo
FP002	Generaría sobre criminalización
FP003	Correcta aplicación de justicia
FP004	Correcta administración de responsabilidad
AP001	Sanción respectiva y no existencia de impunidad
AP002	Permitiría aplicar y sancionar adecuadamente la conducta
AP003	No genera repercusión
AP004	Permitiría llenar el vacío existente en la actual regulación
AP005	Correcta determinación de la reprochabilidad de la conducta del tercer interesado
AP006	Correcta sanción y aplicación de la responsabilidad penal
AP007	Cese de impunidad

---

*Fuente: Elaboración Propia*

Comentario: Finalmente, en relación a las repercusiones, en el derecho una tipificación o determinación correcta de la conducta del tercero interesado se considera que repercutiría positivamente en la correcta aplicación de las sanciones y de la responsabilidad penal en atención a la particularidad de cada contexto en el cual se lleve a cabo dicho ilícito penal.

## CAPITULO IV: CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS

### DISCUSIÓN DE RESULTADOS

La presente investigación, se planteó como objetivo principal determinar el título de imputación bajo el cual se deberá reprochar la conducta del tercero interesado en el delito de tráfico de influencias en el derecho penal peruano; para ello se partió de la hipótesis de que atendiendo a “la configuración del tipo” y “las reglas de la participación”, el fundamento jurídico para atribuir al tercero interesado una responsabilidad penal en el delito de “tráfico de influencias”, es la contribución a la conducta del autor.

En dicho sentido es que se procedió a realizar un análisis legal, doctrinal y jurisprudencial de cómo debería ser reprochada la conducta del tercer interesado en el delito de tráfico de influencias o si esta debería quedar en impune. En ese sentido, un primer punto a mencionar es el Acuerdo Plenario n.º 03-2015 con el cual la Corte Suprema quiso zanjar la discusión al respecto, así se estableció como doctrina jurisprudencial vinculante, “que la conducta del tercero interesado en el tráfico de influencias no cumplía con los presupuestos de la complicidad delictiva regulada en el artículo 25 del Código Penal”, en tanto a entender de la corte el tercero no desplegaba un apoyo físico o psicológico a la producción del hecho ilícito del autor.

Se consideraba por el contrario que lo que podría realizar el tercer interesado es la creación en el autor de la convicción de cometer el hecho ilícito o reforzar la misma, en cuyo supuesto al entender de la corte estaríamos ante un caso típico de instigación en aplicación de lo señalado en el artículo 24 del Código Penal, refiriendo además que en los casos en los que el tercer interesado se limite a aceptar las influencias ofrecidas por el autor del delito, su conducta de conformidad con la estructura típica del artículo 400 del Código Penal devendría en impune.

En la jurisprudencia emitida mediante la “Cas N° 1626 – 2018”, en el fundamento 9.3, encontramos los elementos de instigación: “*Elemento objetivo*” el cual se define como: Obtener un resultado a través de un influjo psíquico en una persona, este tiene que generar en el tercero la decisión de cometer un tipo doloso, pero no existirá la instigación si la persona ya está determina a comer el ilícito penal, en este punto surge

una casuística respecto a la persona que se dedica al tráfico de influencia(ej.lobbying), como se podrá instigar a una persona que ya está determinada a realizarlas, dicha conducta no se tomó en cuenta en el A.P. N° 3-2015, y el “*Elemento subjetivo*” se fundamenta en que la conducta debe ser dolosa del instigador, si no se demuestra que la conducta fue dolosa, el sujeto quedara impune.

El acuerdo plenario en su fundamento N° 9, hace referencia que el delito de Tráfico de influencias es un delito de encuentro, en el cual el tercero interesado es participe por lo que es necesario analizar la configuración penal de los “delitos de intervención necesaria o plurisubjetivos”, en los cuales para su configuración, se requiere necesariamente la actuación de dos a más personas; dentro de esta clasificación encontramos, los “Delitos de Convergencia” y “Delitos de Encuentro”, en los primeros los intervinientes realizan una aportación unilateral a la comisión del delito desde una misma posición, claro ejemplo es el delito tipificado en el art.º 317- “Asociación Ilícita para Delinquir”; y cuando se trata acerca de los delitos de encuentro, son aquellos en los cuales, los que toman parte en la comisión del delito realizan sus acciones o conductas desde posiciones distintas pero estas acciones terminan encontrándose (Tráfico de Influencias), es necesario especificar que dentro de estos delitos, se subdividen en dos tipos penales, un tipo penal que protege al tercero interviniente (violación sexual) en el cual no responderá por el delito pues es el titular del bien jurídico (sujeto pasivo) de la conducta delictiva y un tipo penal en el cual no se protege al tercero interviniente (colusión) por lo tanto, en los delitos especiales donde el sujeto pasivo es el estado y además es el titular del bien jurídico, no existe una barrera legal para sancionar la conducta del interviniente con una responsabilidad penal de cómplice o instigador; respecto a este último apartado surgen las tesis de la impunidad en la cual refiere que si no existe una sanción penal en el tipo para la conducta del interviniente necesario, el no sería responsable penalmente; y la “Tesis de la Punibilidad”, hace mención que, ante la inexistencia de una barrera u obstáculo legal, un principio o regla que impida que el interviniente necesario sea sancionado entonces se remitirá a la reglas generales de participación reguladas en el art.24 y art.25 del CP a fin de que su conducta no quede impune; en esta tesis se plantea dos posiciones una en la cual el interviniente necesario, siempre será responsable penalmente, salvo que actué con eximentes de responsabilidad

penal, y la postura del aporte mínimo, en la cual no se sancionara penalmente cuando el aporte realizado en el tipo penal se ha mínimo, su conducta es impune, si la conducta va más allá del mínimo necesario regulado en un tipo penal si se sancionara penalmente.

Tomando como referencia lo expuesto líneas anteriores, corresponde estudiar brevemente el delito de tráfico de influencias siendo necesario determinar si es un delito de encuentro, de lo expuesto se infiere que sí, pues en el tipo penal describe dos conductas individuales, una del vendedor de influencias y el aceptante, beneficiario o comprador, las cuales se dirigen a un fin común, la intercesión ante la autoridad correspondiente, esto quiere decir que no se trata de un delito monosubjetivo, se trata de un delito de encuentro o plurisubjetivo, por lo cual se tiene que determinar quién es el titular del bien jurídico con el propósito de determinar si el tipo penal protege al tercer interviniente, al tratarse de un delito contra la “administración pública” el titular del “Bien Jurídico” es el estado, por lo cual el sujeto pasivo en el cual recae la conducta delictiva es el estado, por lo cual el “Tercer Interesado” no es sujeto pasivo ni mucho menos sujeto de protección, por lo cual se le puede sancionar siguiendo las reglas reguladas en los Art.24 y Art.25 código penal parte general los cuales dan tratamiento a la participación, ahora procederemos a determinar si el realiza un aporte mínimo que le exima de responsabilidad, la tesis del aporte mínimo, dicta que el tercero interviniente quedara impune si su aporte es mínimo a la realización tipo penal, pero la misma no restringe la posibilidad de sancionarlo como partícipes (cómplice o instigador), es por ello que el aporte mínimo hace referencia a la no puesta en peligro de un bien jurídico que se encuentra protegido por el ordenamiento jurídico por su vulnerabilidad, pero al tratarse de los delitos contra la administración pública, siendo específicos en el delito “tráfico de influencias”, en el cual es necesario la intervención del traficante con el interesado, para consumarse el delito, aunado a ello la jurisprudencia ha especificado “Que no será suficiente para la consumación del delito, que el traficante de influencias realice la invocación de las influencias que él tiene ya sean reales o simuladas, ni que la influencias sean materializadas, pues es necesario e indispensable la obtención o la entrega de forma efectiva de la contraprestación (donativo, promesa o beneficio), por lo cual la intervención de tercero en este delito es necesaria para la consumación del



delito y por ende su conducta crea un riesgo prohibido contra el bien jurídico vulnerable que se encuentra protegido por el ordenamiento jurídico, por cual se tiene que determinar su título de imputación siguiendo las reglas de participación.

En el A.P N° 3-2015, se estableció que el tercero interesado solo puede ser sancionado como instigador, mas no cómplice, respecto al título de imputación de cómplice no compartimos dicha postura pues de acuerdo a lo desarrollado hasta aquí el tercero interesado tiene que ser sancionado siguiendo las reglas establecidas en el art.24 instigación y art.25 cómplice, respecto a este último punto es necesario definir que es cómplice, en el art.25 se describe la conducta del cómplice dictando lo siguiente “el que, dolosamente, presta auxilio para la realización del hecho punible, sin el cual no se hubiera perpetrado, será reprimido con la pena prevista para el autor.....”; en el presente artículo no dicta que el cómplice debe realizar una conducta regulada en el tipo penal específico o especial, si no se sancionara la conducta que favorezca a la realización del delito, sin embargo en el AP N° 3-2015, en su fundamento N° 8, especifica que la conducta del tercero interesado no se puede sancionar; para que se pueda establecer una responsabilidad penal de cómplice es necesario que el mismo realice un verbo rector “invocar influencias”, sin embargo al aceptar esta posición es negar totalmente lo regulado en el art.25 de nuestro CP, pues en él se sanciona el favorecimiento a la conducta del autor en la comisión del delito, mas no la realización de un verbo rector del tipo, más aun si nuestra jurisprudencia ha expuesto que es necesario que exista la entrega efectiva u obtención de la contraprestación, y esta contraprestación solo lo puede efectuar alguien y es el comprador sin el cual no se puede consumir el delito.

Son muchas las críticas que se le han realizado a la interpretación que se esboza el acuerdo plenario de análisis, la mayoría de ellas enfocadas en la limitación que se realiza a la reprochabilidad de la conducta del tercer interesado, enmarcándola de forma exclusiva en el título de imputación de instigación pese a que como la misma corte lo establece en el plenario hoy posición mayoritaria y la doctrina tiende a señalar que esta reprochabilidad de la conducta también se puede dar desde el título de imputación de complicidad, al encontrarnos ante un delito de participación necesaria, encuentro y plurisubjetivo. Sin embargo, los cuestionamientos no culminan ahí, pues se aprecia que la misma corte hace referencia a la existencia de

un vacío legal en la construcción típica del artículo 400, que permite que bajo ciertas circunstancias la conducta del tercer interesado devenga impune, circunstancias fuertemente rechazadas por la doctrina, en relación a que es el tercer interesado quien va a recibir un beneficio directo de activarse las influencias ofrecidas por el autor del ilícito, considerando la existencia de una brecha de impunidad.

Aunado a ello, se planteó consultar a especialistas en el derecho penal, sobre la controversia presentada a debate en la presente investigación, pretendiendo con ello conocer su perspectiva y poder sentar las bases para nuestra propuesta de investigación. Bajo este orden de ideas, un primer orden de preguntas se orientó a la actual configuración que viene presentando el artículo 400 del Código Penal y el rol que juega en dicho ilícito el tercer interesado, así como la relevancia penal de la misma.

Así conforme se puede apreciar de las Tablas 2, 3 y 4 presentadas en el capítulo precedente, existe una tendencia a considerar como necesaria la participación del tercer interesado en el delito de tráfico de influencias, ello desde dos perspectivas, por un lado consideran que el tercer interesado contribuye o refuerza la voluntad del autor del ilícito para la comisión del mismo y por otro lado recalando que es el tercer interesado quien se va a beneficiar directamente con las influencias que se le están ofreciendo, derivando de ahí el asentimiento que se le encuentra a la reprochabilidad de su conducta, llevando a sostener mayoritariamente que no puede la misma devenir en impune, en tanto a su conocimiento doloso del delito; ello condice con la investigación de Espinoza, (2018) recogida como antecedente de investigación, en la cual se refiere que para el tratamiento de la conducta del tercer interesado debe aceptarse la figura la accesoriedad limitada, no siendo solamente punible a grado de cómplice la conducta del tercero interesado, en los casos que acepta la propuesta del sujeto activo, sino que además, en los casos en los que ante una propuesta del autor, este realice una contraoferta; pudiendo a su vez responder bajo el título de instigador, si es el encargado de hacer nacer en el sujeto activo del delito, la convicción de realizar el mismo.

Adicional a ello, también se encontraron críticas en relación a la redacción típica del artículo 400 del Código Penal que regulan los delitos de tráfico de influencias y

tráfico de influencias simuladas, en los cuales solamente se hace referencia a la reprochabilidad de la conducta del sujeto activo del delito, más no del beneficiado con las influencias, esto es el tercer interesado, el cual conociendo de la ilicitud de la propuesta, accede a la misma, encontrándonos con propuestas que nos sugieren la creación de un tipo penal de tráfico de influencias pasivo, enmarcado en sancionar la conducta del beneficiario directo de las influencias, esto es el tercer interesado; estas posturas se condicen con la expresada por Quino, (2021) y adoptada como antecedente de investigación, en donde se refiere que “existe la necesidad, debido a la actual relevancia que tienen estos tipos de delitos, que se especifique una sanción penal expresa para el tercero interesado, a fin de poder evitar inseguridades jurídicas y contribuir en el marco de la lucha contra la corrupción de nuestro país”.

Una segunda línea de interrogantes, se esbozó en relación a lo establecido por la Corte Suprema como doctrina jurisprudencial en el A.P n.º 003-2015 en relación a la remisión de la conducta del tercer interesado en el delito de tráfico de influencias al título de instigador, al señalarse que no se cumplirían con las reglas de la complicidad delictiva, así conforme se puede apreciar en las Tablas 5, 6 y 7, se recogieron una serie de precisiones que nos permiten tener un mayor entendimiento de la problemática a analizar.

Así, se dejó sentado que tanto la figura de la instigación como la de la complicidad, constituyen supuestos de participación criminal, poseyendo indudablemente cada una, una serie de particularidades que permite su diferenciación. Ahora bien, en relación a su aplicación al tratamiento de la conducta del tercer interesado, no existe un consenso unánime en relación a aceptar uno de estos dos títulos de imputación por sobre el otro, pues tanto quienes defienden la predilección de la instigación, como de la complicidad primaria, son claros en señalar que remitirnos a una u otra figura dependerá de la acción específica que realice el tercer interesado en cada caso en concreto, es decir que deberá analizarse caso a caso, conclusión similar a la obtenida por Díaz, (2020) quien en su investigación, que nos sirve como antecedente, señaló que el tercer interesado su conducta será de instigador cuando propone al traficante que el realice intercesión ante un funcionario o servidor público a cargo del caso de interés y será reprochado como cómplice cuando, ante la invocación por el traficante de las influencias que posee, este acepte entregar el beneficio, además es necesario

que la conducta del comprador de influencias tiene que ser dolosa, por ende es necesario que él tenga conocimiento que su actuación es antijurídica. Se concluye que para determinar la reprochabilidad de la conducta del “tercero interesado” en el delito de “tráfico de influencias”, bajo el título de cómplice, es la contribución a la conducta del autor.

En donde si existe mayor consenso es en señalar que salvo ante la existencia de un error de tipo o de prohibición la conducta del tercer interesado no puede devenir en impune, señalándose que se viene dando una incorrecta lectura a lo estipulado por el Acuerdo Plenario n.º 03-2015, en relación a que dicho plenario refiere que “en caso el tercer interesado se limite a aceptar las influencias ofrecidas por el sujeto activo, su conducta será impune”, en la medida que el tipo penal no abarca otra forma de participación delictiva distinta a la autoría. Es decir, se refiere que no existe posibilidad, en base al principio de legalidad de imputar en la actualidad con la construcción típica del artículo 400 responsabilidad al tercer interesado ante tal supuesto de hecho, lo que es distinto a señalar que su conducta es impune de pleno derecho, siendo necesario entonces una reestructuración o complemento de tal formula típica para cerrar tal brecha de impunidad, justamente ello cuando una de las razones que refiere el plenario para hablar de la instigación como fórmula elegida, es que con la aceptación dolosa, el tercer interesado estaría reforzando la voluntad del autor, prácticamente orillándolo a la comisión final del ilícito, ello coincide con lo expuesto por Gallardo, (2020) el cual concluye: “que la conducta del tercer interesado, no puede ser considerada como impune, en tanto sin su participación no sería posible la realización del ilícito, por lo que debería responder como cómplice primario o instigador”, el cual añade que es necesario realizarse adecuadas e idóneas modificaciones en tipo penal que recoge el delito en mención, con la finalidad que permitan cubrir los vacíos, que hacen imposible la punibilidad de una conducta que es relevante, acareando consigo impunidad.

Ello se condice con lo recogido de la aplicación de la última línea de preguntas expresadas en las Tablas 8-15 del capítulo precedente, en las cuales se diserta en relación a cuál debería ser la regulación a plantear para atender correctamente la conducta del tercer interesado en el delito de tráfico de influencias, el título de

imputación adecuado que se le debe dar a su conducta y las repercusiones tanto sociales como judiciales de una reforma en su entendimiento.

En relación al primer punto señalado sobre los criterios que deberían ser tomados en cuenta para una regulación adecuada de “ La conducta del tercer interesada en el delito de tráfico de influencias”, se debe dejar sentado que una postura importante refiere que el actual tratamiento bajo el título de imputación de instigador es el adecuado, al menos en determinadas circunstancias como las descritas en el acuerdo plenario de análisis, no obstante, también son conscientes que la propia estructura típica del artículo 400 del Código Penal comprende más supuestos que los limitados por el plenario, encontrándonos así ante un delito complejo, en el que no se puede presuponer una sola forma de participación criminal (instigación), sino abrir la posibilidad que sea el desvalor de cada conducta realizada la que permita la subsunción adecuada en el título de imputación correspondiente, ya sea de instigación o complicidad primaria; sosteniendo con ello la necesidad de una propuesta legislativa que en virtud del vacío legal advertido por la propia Corte Suprema en el Acuerdo Plenario n.º 03-2015, pueda poner fin a la controversia existente.

Asimismo, se recoge que las repercusiones sociales y legales de esta reforma serían positivas, toda vez que desde el plano social la reforma a plantear permitiría tener un fin preventivo a realización de la conducta punible por parte de la población en general, mientras que desde el plano legal permitirá una mejor administración de justicia, cerrando vacíos de impunidad, lo que en su conjunto permitirá que la población vaya también recobrando la confianza en el sector justicia.

En ese sentido, se ha comprobado la hipótesis planteada en la presente investigación que, atendiendo a la regulación del tipo y las reglas de la participación de nuestro código Penal, de los cuales se concluye que el fundamento jurídico para determinar una responsabilidad penal al tercero interesado en el delito de tráfico de influencias, es la contribución a la conducta del autor, en consecuencia, ante el vacío legal existente al respecto en el artículo 400 del Código Penal corresponde presentar una propuesta legislativa que contribuya a suplir tal deficiencia.

## **PROPUESTA MODIFICATORIAE DEL ART. 400 DEL CODIGO PENAL PERUANO**

### **PROYECTO DE LEY .....**

**SUMILLA: PROYECTO DE LEY QUE PROPONE LA MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 400 DEL CÓDIGO PENAL EN RELACIÓN A DELIMITAR EL TRATAMIENTO DE LA CONDUCTA DEL TERCER INTERESADO EN EL DELITO DE TRÁFICO DE INFLUENCIAS**

**Joselito Estela Ramos**, ejerciendo el Derecho de Iniciativa Legislativa que confiere al artículo n.º 107 de la Constitución Política del Perú, y conforme a lo establecido en los artículos n.º 75º y 76º del Reglamento del Congreso de la República, presento la siguiente propuesta legislativa:

**“Proyecto de ley que propone la modificación del artículo 400 del Código Penal en relación a delimitar el tratamiento de la conducta del tercer interesado en el delito de tráfico de influencias”**

#### **6.1.Exposición de motivos**

La corrupción en todos las áreas de nuestra sociedad es evidente, más aun cuando se trata de la corrupción de altos funcionarios del estado los cuales deberían dar un ejemplo de una conducta digna de imitar, sin embargo es todo lo contrario, en la actualidad hay tres presidentes encarcelados uno de ellos sentenciado por delitos de corrupción, y dos de ellos siendo investigados por delitos contra el estado bajo la modalidad de corrupción, dando fe a lo expuesto el contralo general de la republica Nelson Shack en la página oficial de estado peruano manifestó que el año 2021, se perjudico económicamente al estado con un monto de S/ 24 262 964 827, el cual representa el 13.6 % del presupuesto nacional ejecutado y en el 2022 Perú se encuentra en el ranking de

la corrupción N° 101 de 180 país con índice de corrupción de 36 la cual se mantiene desde el 2021.

El juez supremo Manuel Estuardo Luján Túpez, en la página oficial del Poder Judicial manifiesta que el 60% de los procesos de corrupción que involucran a los altos funcionarios del estado corresponde a “Tráfico de Influencias” y “cohecho”.

El “Tráfico de Influencias”, como se puede evidenciar de lo anterior es el más común en la esfera de la corrupción; la conducta de traficar influencias tuvo relevancia penal en el CP 1924, tomando como referencia para su tipificación, la legislación colombiana e hispana, en la actualidad este delito se encuentra tipificado en el art.400, y se inspiración en las regulaciones del CP de Colombia de 1980 y CP de España de 1973, citado artículo será materia de análisis con la finalidad de corroborar si en el tipo penal se reprocha penalmente las conductas de los intervinientes en el tipo, con la finalidad de comprobar el tratamiento correcto al cual deben someterse.

Artículo 400 - CP, dicta lo siguiente:

“El que, invocando o teniendo influencias, reales o simuladas, recibe, hace dar o prometer para sí o para un tercero, donativo o promesa o cualquier otra ventaja con el ofrecimiento de interceder ante un funcionario o servidor público que ha de conocer, esté conociendo, o haya conocido, un caso judicial o administrativo, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de seis años”.

Como se puede apreciar de la reacción típica del artículo 400 antes descrito hoy el legislador penal en el momento de redactar el delito de tráfico de influencias ha prestado especial interés en la conducta de aquel traficante o vendedor de influencias, dejando de lado la conducta del influenciado en este caso la autoridad o funcionario a cargo de resolver un asunto judicial o administrativo, en tanto por obvias consideraciones tal autoridad o funcionario responderá por un delito especial independiente del delito del tráfico de influencias; no obstante, la redacción típica presentada también ha dejado de lado la figura del

tercero interesado en el delito de tráfico de influencias y cuál será la responsabilidad y su conducta.

Ante ello, es la Corte Suprema quien por medio de la jurisprudencia y el Acuerdo Plenario n.º 03- 2015 al tratar de responder a la interrogante de cuál sería la responsabilidad justamente la conducta del tercero interesado en el delito de tráfico de influencias decantándose por señalar que dicha conducta no cumple con los estándares de la complicidad criminal, debiéndose por lo tanto reprochar bajo la figura de instigación penal en tanto a su entender es el tercero interesado quien hace nacer en el comprador de influencias la voluntad de cometer el ilícito e interceder en su favor frente a una autoridad o funcionario; adicional a esto también se ha señalado que en aquellos supuestos en los que el tercer interesado se limite a aceptar las influencias, reales o ficticias, que le propone el vendedor o traficante de influencias hoy su conducta devendrá en impune no debiendo ser reprochada penalmente.

Ante ello, debemos partir de asumir que tanto la figura de la instigación como la de la complicidad, constituyen supuestos de participación criminal, poseyendo indudablemente cada una, una serie de particularidades que permite su diferenciación. Ahora bien, en relación a su aplicación al tratamiento de la conducta del tercer interesado, no existe un consenso unánime en relación a aceptar uno de estos dos títulos de imputación por sobre el otro, pues tanto quienes defienden la predilección de la instigación, como de la complicidad primaria, son claros en señalar que remitirnos a una u otra figura dependerá de la acción específica que realice el tercer interesado en cada caso en concreto, es decir que deberá analizarse caso a caso.

En donde si existe mayor consenso es en señalar que salvo ante la existencia de un error de tipo o de prohibición la conducta del tercer interesado no puede devenir en impune, señalándose que se viene dando una incorrecta lectura a lo estipulado por el Acuerdo Plenario n.º 03-2015, en relación a que dicho plenario refiere que en caso el tercer interesado se limite a aceptar las influencias ofrecidas por el sujeto activo, su conducta será impune, en la medida que el tipo penal no abarca otra forma de participación delictiva distinta



a la autoría. Es decir, se refiere que no existe posibilidad, en base al principio de legalidad de imputar en la actualidad con la construcción típica del artículo 400 responsabilidad al tercero interesado ante tal supuesto de hecho, lo que es distinto a señalar que su conducta es impune de pleno derecho, siendo necesario entonces una reestructuración o complemento de tal fórmula típica para cerrar tal brecha de impunidad, justamente ello cuando una de las razones que refiere el plenario para hablar de la instigación como fórmula elegida, es que con su aceptación dolosa el tercer interesado estaría reforzando la voluntad del autor, prácticamente orillándolo a la comisión final del ilícito

Ahora bien en relación a los criterios que deberían ser tomados en cuenta para una regulación adecuada de la reprochabilidad de la conducta del tercer interesada en el delito de tráfico de influencias, se debe dejar sentado que una postura importante refiere que el actual tratamiento bajo el título de imputación de instigador es el adecuado, al menos en determinadas circunstancias como las descritas en el acuerdo plenario de análisis, no obstante, también son conscientes que la propia estructura típica del artículo 400 del Código Penal comprende más supuestos que los limitados por el plenario, encontrándonos así ante un delito complejo, en el que no se puede presuponer una sola forma de participación criminal (instigación), sino abrir la posibilidad que sea el desvalor de cada conducta realizada la que permita la subsunción adecuada en el título de imputación correspondiente, ya sea de instigación o complicidad primaria; sosteniendo con ello la necesidad de una propuesta legislativa que en virtud del vacío legal advertido por la propia Corte Suprema en el Acuerdo Plenario n.º 03-2015, pueda poner fin a la controversia existente.

Asimismo, se debe considerar que las repercusiones sociales y legales de esta reforma serían positivas, toda vez que desde el plano social la reforma a plantear permitiría tener un fin preventivo en la realización de la conducta punible, mientras que desde el plano legal permitirá una mejor administración de justicia, cerrando vacíos de impunidad, lo que en su conjunto permitirá que la población vaya también recobrando la confianza en el sector justicia.

## 6.2.Fórmula legal

Se plantea la modificación del artículo 400 del Código Penal mismo que regula el delito de tráfico de influencias en su forma simple y agravada bajo el siguiente texto:

El que, invocando o teniendo influencias reales o simuladas, recibe, hace dar o prometer para sí o para un tercero, donativo o promesa o cualquier otra ventaja o beneficio con el ofrecimiento de interceder ante un funcionario o servidor público que ha de conocer, esté conociendo o haya conocido un caso judicial o administrativo, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de seis años; inhabilitación, según corresponda, conforme a los incisos 2, 3, 4 y 8 del artículo 36; y con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días-multa.

Si el agente es un funcionario o servidor público, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de ocho años; inhabilitación, según corresponda, conforme a los incisos 1, 2 y 8 del artículo 36; y, con trescientos sesenta y cinco a setecientos treinta días-multa.

Debiendo precisarse de la siguiente manera:

El que, invocando o teniendo influencias reales o simuladas, recibe, hace dar o prometer para sí o para un tercero, donativo o promesa o cualquier otra ventaja o beneficio con el ofrecimiento de interceder ante un funcionario o servidor público que ha de conocer, esté conociendo o haya conocido un caso judicial o administrativo, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de seis años; inhabilitación, según corresponda, conforme a los incisos 2, 3, 4 y 8 del artículo 36; y con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días-multa.

**Con igual pena, será reprimido el tercero que, con el objetivo de dolosamente obtener ventaja de las influencias del sujeto activo del delito, acepta las influencias ofertadas o refuerza la determinación del mismo a la comisión del ilícito.**

Si el agente es un funcionario o servidor público, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de ocho años; inhabilitación, según corresponda, conforme a los incisos 1, 2 y 8 del artículo 36; y, con trescientos sesenta y cinco a setecientos treinta días-multa.

### **6.3. Análisis costo beneficio**

La presente propuesta legislativa propone la modificación interpretativa del tratamiento legal de la reprochabilidad de la conducta del tercer interesado en el delito de tráfico de influencias ante la existencia de vacíos legales que suponen espacios de impunidad, por lo que surtirá efecto en el sistema de administración de justicia pudiendo irrogar en gastos de capacitación a los operadores de dicho sistema a efectos de una correcta aplicación de los lineamientos establecidos, no obstante, se espera que los beneficios legales y sociales que irroguen del presente proyecto sean sustancialmente superiores permitiendo adecuar a los procesos penales en los que se respeten los principios de legalidad y lesividad, y a la vez se contribuya a recuperar la confianza de la población en el sector justicia mediante el cierre de brechas de impunidad.

## CONCLUSIONES

1. Se ha determinado que el delito de tráfico de influencias es un delito plurisubjetivo, por lo cual es necesario la intervención de dos a más personas, el traficante y el comprador de influencias, sin la intervención de este último no se puede consumar el delito, pues la jurisprudencia ha expuesto que para la consumación “no será suficiente que, el traficante de influencias realice la invocación de las influencias que él tiene ya sean reales o simuladas, ni que la influencias sean materializadas, pues es necesario e indispensable la obtención o la entrega de forma efectiva de la contraprestación (donativo, promesa o beneficio).
2. Se ha determinado que el título de imputación bajo el cual se deberá reprochar la conducta del tercero interesado en el delito de tráfico de influencias en el derecho penal peruano, esta internamente relacionado con la conducta que el mismo despliegue en el iter criminis del delito, pudiendo responder como cómplice primario o instigador del mismo, no deviniendo en impune, salvo la existencia de error invencible.
3. Se ha analizado la configuración típica del artículo 400 del Código Penal, verificando la realidad normativa de la reprochabilidad de la conducta del tercero interesado en el delito de tráfico de influencias, identificándose la existencia de un vacío normativo como consecuencia de la no previsión típica de la conducta del tercero interesado en el citado tipo penal, abriendo con ello la puerta a una brecha de impunidad de su conducta ante determinadas circunstancias.
4. Se ha analizado el artículo 25 del Código Penal, y verificado que la aplicación del mismo al tercero interesado, le correspondería el título de imputación de cómplice, al aceptar la oferta de vendedor.
5. Se ha verificado el tratamiento del tercero interesado en la jurisprudencia y doctrina nacional y extranjera en el delito de tráfico de influencias, el cual se viene dando en virtud de lo expresado por la Corte Suprema en el Acuerdo Plenario n.º 03-2015 bajo el título de imputación de instigación, en el caso de que el tercero haga surgir o refuerce la voluntad delictiva del sujeto activo e impune en los supuestos que se limite a aceptar las influencias ofertadas, tratamiento que ha sido objeto de críticas en la doctrina, en relación a que es el tercer interesado el beneficiado directo con las influencias del traficante.

6. Se ha verificado la percepción de los operadores jurídicos de la región en relación al tratamiento que se le debe dar a la conducta del tercero interesado en el delito de tráfico de influencias, los cuales coinciden en la necesidad de un correcto tratamiento de dicha conducta, señalando que dependerá de las circunstancias que rodeen la acción del tercer interesado, si este debe responder bajo el título de cómplice primario o instigador.
7. Se debe reformar el art.400 del código penal, para un correcto tratamiento a la conducta del tercero interesado en el delito de tráfico de influencias, a efectos de evitar supuestos de impunidad en el mismo, mediante la remisión adecuada a las reglas de participación criminal y la taxatividad de la conducta punible.

## **RECOMENDACIONES**

1. Desde el punto de vista teórico se recomienda continuar con la presente investigación efectos de contribuir a determinar con mayor precisión y alcance cuál es correcto título imputación bajo el cual debe responder el tercero interesado en el delito de tráfico de influencias, consideramos que es necesaria la modificación del artículo 400 del Código Penal para dicho fin, por lo que necesitamos a las personas que pretendan continuar o replicar la presente investigación a poder realizarla a mayor escala, a efectos de generar un impacto positivo en la práctica del derecho penal en nuestro ordenamiento jurídico.
2. Desde el punto de vista metodológico, se recomienda tomar de base de los instrumentos de investigación elaborados para el presente trabajo y poder quizá complementarlos con investigaciones de corte mixto con una mayor presencia de información estadística hoy que se irá generando conforme se vaya acrecentando el debate sobre este tan importante tema en la comunidad jurídica.

## BIBLIOGRAFÍA

- Abanto Vásquez, Manuel (2019). El delito de Tráfico de Influencias. Lima – Perú, Instituto Pacifico pp 95.
- Chávez, J. (2019). Problemática del tráfico de influencias, como un delito de mera actividad, peligro abstracto o de resultado desde un punto de vista dogmático y jurisprudencial. Escuela de Postgrado Universidad César Vallejo. [https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/86195/Ch%c3%a1vez\\_RJ-SD.pdf?sequence=1&isAllowed=y](https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/86195/Ch%c3%a1vez_RJ-SD.pdf?sequence=1&isAllowed=y)
- Cugat, M. (2021). El tráfico de influencias, Un tipo prescindible. Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología. <http://criminnet.ugr.es/recpc/16/recpc16-07.pdf>
- Díaz, K. (2020). Responsabilidad penal del tercero interesado en el delito de Tráfico de Influencias regulado en el artículo 400° del Código Penal. [Escuela de Postgrado, Universidad Nacional de Trujillo]. Repositorio UNT [https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/46585/D%c3%a1vez\\_RVK-SD.pdf?sequence=1&isAllowed=y](https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/46585/D%c3%a1vez_RVK-SD.pdf?sequence=1&isAllowed=y)
- Gaceta, Penal. (2015), Diccionario Penal Jurisprudencia, Lima, Perú: Gaceta penal y procesal penal, pp.577.
- Espinoza, Á. (2018). Razones dogmáticas que solucionan la controversia sobre la punibilidad del "cómplice" interesado en el delito de tráfico de influencias. Vox Juris,36(2),121,137.<https://www.aulavirtualusmp.pe/ojs/index.php/VJ/article/view/1310/pdf10>
- Gallardo, H. (2020). Participación del tercero interesado en la responsabilidad penal del delito de tráfico de influencias en el ordenamiento jurídico peruano. [Escuela de Postgrado, Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo] Repositorio UNPRG.
- Gonzales Dionicio, M. P. (2018). LA POSICIÓN DEL INTERESADO EN EL DELITO DE TRÁFICO DE INFLUENCIAS. Lima: Escuela de Postgrado-USMP. Obtenido de [https://repositorio.usmp.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12727/3948/gonzales\\_dmp.pdf?sequence=3&isAllowed=y](https://repositorio.usmp.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12727/3948/gonzales_dmp.pdf?sequence=3&isAllowed=y)

- HONIG, R., Kausalität und objektive Zurechnung [Causalidad e imputación objetiva]  
Publicado en Festgabe für Reinhard Von Frank [homenaje a Reinhard Von Frank] tomo I, pp. 174/201. Trad. de Marcelo Sancinetti. (coord..) en Causalidad, riesgo e imputación. Ed. Hammurabi, Bs. As., 2009, pág. 105/134.
- Huamán, C. (2021). El rol del tercero interesado en el delito de tráfico de influencias. [Segunda Especialidad, Pontificia Universidad Católica del Perú]. Repositorio PUCP. <https://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/20.500.12404/21804>.
- Hurtado Pozo, José (2005). Interpretación y aplicación del art. 400 CP del Perú. Anuario de Derecho Penal-2005.Lima.  
[http://perso.unifr.ch/derechopenal/assets/files/anuario/an\\_2005\\_12.pdf](http://perso.unifr.ch/derechopenal/assets/files/anuario/an_2005_12.pdf)
- Mir Puig, Santiago & Muñoz Conde, Francisco (2002). Adiciones al Derecho Penal Español. Español. JESCHECK. España: file:///D:/16049-Texto%20del%20art%C3%ADculo-63753-1-10-20161213%20(1).pdf
- Mori, A. (2022). El tercero interesado en el delito de tráfico de influencias. [Tesis de Maestría, Universidad Nacional Mayor de San Marcos]. Repositorio UNMSM. <http://cybertesis.unmsm.edu.pe/handle/20.500.12672/18315>
- Muñoz Conde, Francisco (2015), Derecho Penal Parte Especial, Valencia, España: Tirant lo Blanch.pp.848-855.
- Muñoz Conde, Francisco (2010). Derecho Penal Parte General. Valencia, España: Tirant lo Blanch pp 436.  
[https://www.derechopenalnlared.com/libros/Derecho\\_Penal\\_Parte\\_General\\_Munoz\\_Conde\\_Mercedes\\_Aran.pdf](https://www.derechopenalnlared.com/libros/Derecho_Penal_Parte_General_Munoz_Conde_Mercedes_Aran.pdf)
- Nogales, I. (2019). Análisis Jurídico del Delito de Tráfico de Influencias por parte de funcionarios públicos. Universidad Católica de Santiago de Guayaquil.  
<http://201.159.223.180/bitstream/3317/13820/1/T-UCSG-PRE-JUR-DER-MD-266.pdf>



- Portomeñe, F. (2016). El tráfico de influencias en la Propuesta de Armonización de la Legislación Penal en la Lucha contra el Crimen Organizado en Centroamérica. Algunas consideraciones técnicas y político-criminales. Revista de derecho. <https://www.camjol.info/index.php/DERECHO/article/view/2321/2099>
- Quino, E. (2021). Omisión penal expresa al tercero interesado en el delito de tráfico de influencias y la repercusión en su ejecución. [Tesis de Maestría, Universidad César. Vallejo] Repositorio UCV. [https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/56058/Quino\\_AEE-SD.pdf?sequence=1&isAllowed=y](https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/56058/Quino_AEE-SD.pdf?sequence=1&isAllowed=y)
- Rodríguez, J. (2017). El solicitante en las influencias traficadas: ¿todos son culpables? Ius et veritas. <https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/iusetveritas/article/download/16184/16601/0>
- Roxin, Claus. (1998). Autoría y dominio del hecho en el derecho penal. Alemania. <https://www.marcialpons.es/media/pdf/9788491231615.pdf>
- Salinas Sicha, Ramiro.(2014). Delitos Contra la Administración Pública. Lima. Perú. Editorial Justitia. pp 656 – 657.
- Villegas, P. (2019). Tratamiento dogmático y jurisprudencial del bien jurídico afectado en el delito de tráfico de influencias simulado en el Perú. Repositorio PUCP. [https://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/20.500.12404/17007/VILLEGAS\\_BERNAOLA\\_PERCY.pdf?sequence=1&isAllowed=y](https://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/20.500.12404/17007/VILLEGAS_BERNAOLA_PERCY.pdf?sequence=1&isAllowed=y)
- Yanac Huacanca, Alex R. (2019). Fundamentos jurídicos penales para imputar al interesado en el delito de tráfico de influencias como partícipe en el Perú, Huaraz: Universidad Santiago Antúnez de Mayolo. <http://repositorio.unasam.edu.pe/handle/UNASAM/4376>

## LINKOGRAFIA

- ✓ Página Oficial del Poder Judicial:

[https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/cortesuprema/s\\_cortes\\_suprema\\_home/as\\_inicio/as\\_enlaces\\_destacados/as\\_imagen\\_prensa/as\\_notas\\_noticias/2023/cs\\_n-procesos-corrupcion-involucran-altos-funcionarios-trafico-influencias-cohecho](https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/cortesuprema/s_cortes_suprema_home/as_inicio/as_enlaces_destacados/as_imagen_prensa/as_notas_noticias/2023/cs_n-procesos-corrupcion-involucran-altos-funcionarios-trafico-influencias-cohecho).

- ✓ Plataforma digital del Estado Peruano – Contraloría General de la Republica:

<https://www.gob.pe/institucion/contraloria/noticias/629665-peru-perdio-mas-de-s-24-mil-millones-en-2021-por-corrupcion-e-inconducta-funcional>.

- ✓ Plataforma Digital del Diario Global “EL PAIS” – Caso de Vladimiro Montesino condenado a cinco años por el delito de “Tráfico de Influencias”.

[https://elpais.com/diario/2003/03/25/internacional/1048546827\\_850215.html](https://elpais.com/diario/2003/03/25/internacional/1048546827_850215.html).

- ✓ Latina América – declaración, del 5 de Marzo de 2003, de Matilde Pinchi Pinchi “Colaboradora Eficaz” y Jacqueline Beltrán.

<https://www.latinamericanstudies.org/peru/montesinos-beltran-03.htm>.

- ✓ Diario “LA REPUBLICA”, 18/07/2022, Matilde Pinchi Pinchi, “colaborado eficaz”, en el caso de “Montesino”.

<https://larepublica.pe/datos-lr/respuestas/2022/07/18/quien-es-matilde-pinchi-pinchi-la-colaboradora-eficaz-del-caso-de-vladimiro-montesinos-evat>.